



Ayotzinapa:
reflexiones sobre la violencia desde Latinoamérica

Ayotzinapa: reflexiones sobre la violencia desde Latinoamérica

Índice

Introducción

Lucía Abbattista, Yazmín Conejo y María Soledad Lastra

Pág. 2

Artículos de opinión

Ayotzinapa como tema: violencia genérica, indignación, política

Nora Rabotnikof

Pág. 9

Ayotzinapa en el contexto de la restauración autoritaria en México

Adrián Velázquez Ramírez

Pág. 19

1

Crónicas latinoamericanas

Ayotzinapa y nuestros pueblitos perdidos

Claudio Alvarado Lincopi

Pág. 27

Del 1 al 43... Justicia

José Huerta Coronel

Pág. 31

Ayotzinapa a seis meses, nos siguen faltando 43, ¿qué hacemos?

Nydia Lourdes Reyes Rodríguez

Pág. 34

Ayotzinapa somos tod@s

Melina Jean Jean

Pág. 37

Fotografía de tapa: *Colectivo SADO*



Introducción

Lucía Abbattista*
La Plata, 2015
mlabbattista@gmail.com

Yazmín Conejo**
Ciudad de México, 2015
ispoco@gmail.com

María Soledad Lastra***
La Plata, 2015
lastra.soledad@gmail.com

El pasado 26 de septiembre de 2014, México volvió a vivir un nuevo episodio de violencia dentro de esta *espiral macabra* que no ha cesado desde hace ya varias décadas y que superpone eventos, uno tras otro, que la memoria colectiva no puede o ha dejado asimilar.

Los hechos ocurrieron durante la noche de ese 26 de septiembre y la madrugada del día 27 cuando el grupo de estudiantes guerrerenses pertenecientes a la Normal Rural de Ayotzinapa "Isidro Burgos" fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula, luego de que tomaran una serie de autobuses destinados a dos comitivas, una viajaría a realizar prácticas en la Costa chica de Guerrero y la otra se movilizaría a la Ciudad de México a participar de la marcha anual en conmemoración de los estudiantes masacrados por el gobierno el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Una completa ironía.

Ninguna de estas acciones llegó a realizarse pues, ante la movilización de los estudiantes por la toma de los autobuses para las actividades que tenían dispuestas, el alcalde José Luis Abarca al suponer que se dirigían a boicotear el acto en el que su esposa María

de Los Ángeles Pineda, quien hasta ese momento fungía como directora municipal del Instituto Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), daría su segundo informe anual de las actividades realizadas al frente de esta Institución. Ante esta situación, Abarca ordenó la detención de los estudiantes.

A partir de este momento la situación se complica y se sale de control, pues la detención resulta en un enfrentamiento desigual en el que pierden la vida 6 estudiantes, 25 resultan heridos y 43 más son detenidos y entregados, según se presume, a sicarios integrantes del grupo delictivo "Guerreros Unidos", escindidos del cártel de los Beltrán Leyva y presuntamente con estrecha vinculación con gobierno municipal de Iguala y particularmente con el Alcalde José Luis Abarca y su esposa.

Ante las limitantes para esclarecer el paradero de los estudiantes por parte de las autoridades guerrerenses, el caso se torna de carácter federal 10 días después de los hechos, con la declaración pública del presidente Enrique Peña Nieto y la consignación del caso hacia el 26 de octubre a la Procuraduría General de la República



(PGR) a cargo del ahora ex procurador Jesús Murillo Karam; quien dejó el cargo, supeditado por el Ejecutivo Federal, luego de su controversial informe del día 27 de enero de 2015 en el que establecía que el caso debía cerrarse pues se había llegado a la conclusión, a la “verdad histórica”, de que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados por integrantes de “Guerreros Unidos” en un basurero del municipio vecino de Cocula, Guerrero.

Pero ni los padres ni los organismos que los apoyan aceptaron dicho informe ni la tentativa de darle *carpetazo* con la declaración de Murillo Karam, y gracias en gran parte a la ayuda del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) quienes refutaron las pruebas dadas por la PGR sobre el destino de los estudiantes, es que se incrementa la presión hacia la procuraduría. Esta serie de inconsistencias llevan a establecer las condiciones para separar a Murillo Karam de su cargo, y colocarlo como secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), institución que lo saca completamente del panorama de investigaciones respecto a lo acontecido en Iguala; mientras se nombra, después de una controvertida elección, en el cargo Procuradora a Arely Gómez con quien se intentan “calmar las aguas”, sin que esto afortunadamente haya sucedido.

Hasta ahora distintas organizaciones no gubernamentales de carácter nacional e internacional se han pronunciado sobre estos hechos y han intervenido de diversas maneras sobre su esclarecimiento. Una primera exploración evidencia la importante participación de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Amnistía internacional (AI), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización

de las Naciones Unidas (ONU), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), entre otros, que han exigido que se investigue sobre lo ocurrido, alarmados porque ni el gobierno local ni el federal han logrado establecer el paradero de los estudiantes y mucho menos la restitución de justicia.

Por su parte la población civil cansada de las hipótesis gastadas, de la impunidad y corrupción entre los altos mandos del gobierno local y federal, de la violencia en general; se dispuso a protestar a través de las llamadas Jornadas Globales por Ayotzinapa que iniciaron el 9 de octubre de 2014 y han continuado realizándose cada día 26, no sólo dentro de México sino en muchas ciudades alrededor del mundo, para abogar por la justicia, por la aparición y presentación con vida de los estudiantes, pero sobre todo por la memoria para evitar que siga siendo víctima de esa *espiral macabra* que se mueve con los hilos de aquellos que detentan el poder.

En la ciudad de La Plata, Argentina, nuestra comunidad universitaria fue promotora de gran cantidad de movilizaciones e iniciativas. Así como los estudiantes de grado impulsaron asambleas y marchas, estudiantes y graduados de la Maestría en Historia y Memoria (FAHCE-UNLP), residentes en distintos puntos de nuestro continente, promovieron un “Primer Comunicado” en rechazo del accionar criminal de las fuerzas policiales y parapoliciales de Guerrero, en condena al accionar represivo del Estado mexicano en general contra movimientos sociales y como exigencia de justicia, recordando la importancia del Nunca Más para América Latina (1). Convocados por la gravedad de los hechos ocurridos el 26 de septiembre y las amplias repercusiones que tuvo la desaparición de los 43 estudiantes,



normalistas de Ayotzinapa se manifestaron también, en los días siguientes, la Coordinación de la Maestría, el Consejo Directivo de la Facultad y la Dirección de Derechos Humanos de la Universidad, y difundieron comunicados de repudio y solidaridad refrendados por todos los claustros (2), asumiendo la importancia que tiene, en estas situaciones, amplificar las voces de denuncia y reclamo para romper los silencios que garantizan impunidad.

A pesar de estos esfuerzos, a medida que transcurrían las semanas la información que llegaba por los medios de prensa se tornaba cada vez más confusa y alarmante. Así es que, motivados por lo que parecían maniobras de encubrimiento y desinformación, las actividades en el mundo entero, motorizadas por todo tipo de colectivos, no mermaron sino que se expandieron. El 14 de noviembre, el mismo grupo de estudiantes de la Maestría que había impulsado el Comunicado convocó a una intervención cultural fotográfica en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, invitando a trabajadores docentes y no docentes, estudiantes y autoridades, a portar los rostros de los normalistas, como se estaba realizando en diferentes localidades del mundo. Al mes siguiente, una actividad similar fue propuesta pero ya no en el establecimiento de la Facultad, sino en la Plaza San Martín, en pleno centro de La Plata, incluyendo esta vez también a docentes y estudiantes de la Facultad de Bellas Artes, y allí se realizó una muestra y se instaló un taller de serigrafía para difundir la campaña “Ayotzinapa somos tod@s”, tal como relata con mayor nivel de detalle en su crónica Melina Jean Jean.

Por todo esto, es decir, por la manera en que este hecho nos atraviesa y sigue conmocionando, los y las integrantes del comité editorial de *Aletheia*, docentes y

estudiantes, decidimos crear por primera vez un cuaderno especial para nuestra Revista, con el propósito de intervenir sobre esta coyuntura inmediata sin postergar tampoco el dossier que habíamos programado para este número, sobre el pasado reciente y la situación actual de Colombia. De ahí que, buscando reunir distintas miradas sobre la crítica coyuntura que vive México, en el mes de febrero convocamos a investigadores vinculados de alguna forma a la FAHCE-UNLP, para que nos enviaran escritos que sirvieran de primer acercamiento a la situación de México, desde distintas perspectivas académicas y provenientes de variadas geografías de América Latina. Esto significó, para cada uno de ellos, un reto especial para detenerse a pensar en medio del ritmo vertiginoso de hechos que se sucedían en relación a este caso (detención de estudiantes, descubrimiento cotidiano de fosas clandestinas, las primeras caravanas de los familiares de los desaparecidos, las denuncias y reclamos de los organismos internacionales y las distintas respuestas que, desde el Estado, tendieron a cerrar la revisión del tema).

Entonces, con el fin de reponer los embates ocurridos en Iguala y la situación de México en general, que se ha destapado a raíz de estos acontecimientos, presentamos este cuaderno dividido en dos partes que cuenta en un primer momento con dos análisis o críticas de especialistas y posteriormente, se ocupa de iluminar la diversidad de acciones emprendidas por organizaciones sociales y estudiantiles en Colombia, México y Argentina.

En la primera parte, nos interesamos en particular por recuperar discusiones sobre la relación entre violencia y política, las formas de la represión estatal en la historia reciente de nuestro continente, los repertorios de acción colectiva y las distintas respuestas



que se fueron ensayando hasta la fecha por parte de la sociedad civil mexicana frente a estos fenómenos. Para ello convocamos a Nora Rabotnikof y a Adrián Velázquez Ramírez, quienes generosamente compartieron con nosotros algunas de sus perspectivas sobre el caso.

Nora Rabotnikof, argentina, reconocida especialista en el campo de estudios de la filosofía política, docente e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nos invita a reflexionar a través de su artículo sobre la construcción política del caso Ayotzinapa en el discurso público mexicano y sobre las transformaciones o deslizamientos de sentidos que fue adquiriendo el tema con el correr de los primeros seis meses. Esta intervención también fue compartida a través de la conferencia que dictó el día 25 de marzo, titulada “Ayotzinapa: tragedia y política” y que convocó en la semana de la memoria de la FAHCE a un nutrido público interesado por la actualidad del caso. En sus intervenciones, la Dra. Rabotnikof señala y problematiza el caso de Ayotzinapa a través de la metáfora espacio-temporal del “parteaguas”, deshebrando en los derroteros del proceso de “verdad” de la desaparición de los normalistas la compleja trama de actores políticos y sociales y sus interrelaciones. ¿Cuáles fueron los sentidos construidos por la prensa en torno al caso? ¿Cómo se instalan las distintas consignas que desde la sociedad civil denuncian la responsabilidad del Estado? ¿Cómo interactúan los funcionarios ante la desaparición de los estudiantes y qué elementos aportan u obstruyen ante las investigaciones? Estas y otras preguntas atraviesan la lectura crítica que nos ofrece Rabotnikof para abrir los debates sobre los sentidos posibles que encarna Ayotzinapa.

Por otro lado, Adrián Velázquez Ramírez, un joven politólogo mexicano que investiga sobre los cambios conceptuales en el lenguaje político durante la transición democrática en Argentina, nos ofrece una mirada distinta a la de Rabotnikof sobre el caso Ayotzinapa. Sus reflexiones parten de situar la desaparición de los normalistas en el marco más general del largo proceso de impunidad que vive México en relación a otras violencias que atravesaron su historia, planteando cómo visto desde un proceso de largo plazo, el caso de Ayotzinapa resulta menos una excepción que un hecho de continuidad. Así, Ayotzinapa se integra al elenco de efectos devastadores que vive México a partir de una promesa democrática que no logra cumplirse, pues podría pensarse que en la transición política del autoritarismo a la democracia, fueron los aspectos formales los que habrían ganado más atención pública en detrimento de los problemas vinculados a la protección de los derechos humanos en el país. Ayotzinapa, con sus matices y singularidades, se convierte en la reflexión de Velázquez Ramírez en un cristal desde el cual observar el despliegue de la “restauración autoritaria” en México.

En la segunda parte, quisimos mostrar ese amplio universo de respuestas que se han ido tejiendo sobre el tema, para lo cual lanzamos una convocatoria que reuniera algunas voces ilustrativas sobre lo que está sucediendo en otras latitudes con el propósito de rescatar algunas impresiones y sensaciones que se fueron viviendo a lo largo de las distintas jornadas de protesta, solidaridad y organización que se han llevado a cabo hasta ahora.

Tuvimos a bien recibir crónicas y relatos que rescatan las voces de solidaridad que se han manifestado en Bogotá, Puebla, Ciudad de México y La Plata, a través de sus autores.



Pero sobre todo dichos relatos, impulsados por el caso específico de Ayotzinapa, evocan y se articulan en torno a otras experiencias dolorosas y de lucha por justicia y contra el olvido. Así, el caso de los normalistas aparece estrechamente vinculado a la memoria de los desaparecidos argentinos, las víctimas del paramilitarismo en Colombia, a la preocupante marginalidad de los pueblos chilenos, a las muertes sembradas en México desde otros tiempos y regiones (los muertos de ACTEAL, de la guardería ABC, etc), entre otros sectores de afectados.

Así, estas crónicas nos permiten recuperar ciertas dimensiones que vinculan las historias latinoamericanas desde el dolor y la lucha contra la impunidad, y recorrer las consignas de denuncia, como la de “aparición con vida”, desde una mirada que fluctúa entre lo local y lo global. Compartimos entonces la narraciones de Claudio Alvarado Lincopi, chileno que reside en Colombia y estudiante de la maestría de Historia y Memoria; Melina Jean Jean, estudiante de nuestra maestría e impulsora de las intervenciones que se realizaron en la FAHCE y en Plaza San Martín en La Plata; Nydia Reyes, mexicana, estudiante de doctorado en la Universidad de Puebla y colega de docentes de la Maestría y José Huerta Coronel, mexicano y estudiante, residente en la Ciudad de México y con una activa participación en las primeras jornadas de denuncia realizadas en la capital del país.

Finalmente, deseamos expresarle nuestro agradecimiento a Florencia Basso por su dedicación en la tarea del diseño y selección de las imágenes que acompañan el Cuaderno.

Esperamos que este cuaderno ofrezca a los lectores de *Aletheia* distintas puertas de acceso a un problema que no pierde actualidad. En el marco de una gradual retirada del tema de la agenda de los medios

de comunicación, estamos convencidos de que vale la pena profundizar en las preguntas que despertó este hecho en México y en el mundo; sólo con el tiempo podremos asegurar con mayor precisión cuánto tiene Ayotzinapa de parteaguas en la historia mexicana. Pues si pensamos junto con Rabolnikof que todavía no están dadas las condiciones para afirmar que se han transformado las expectativas a partir de Ayotzinapa, habrá que considerar también que esta ha sido una experiencia con efectos en la identidad política y en los modos de subjetivación de ciertas vivencias sociales sin precedentes en estos últimos tiempos, con lo cual los efectos de transformación son relativos y permanecen latentes.

Notas

* Lucía Abbattista es Profesora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, terminó de cursar la Maestría en Historia y Memoria (UNLP) y se encuentra realizando el Doctorado en Historia de la misma institución, con beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IDIHCS).

** Yazmín Conejo es Licenciada en Literatura Latinoamericana por la Universidad Autónoma de Yucatán, México. Actualmente es estudiante de la Maestría en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata.

*** María Soledad Lastra es Doctora en Historia (FAHCE, UNLP), Magíster en Ciencias Sociales (FLACSO, México) y Licenciada en Sociología, graduada de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con



sede de trabajo en el Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM).

(1) "Primer comunicado público sobre la actual situación de los estudiantes de Ayotzinapa, México". Estudiantes de la Maestría en Historia y Memoria (FAHCE-UNLP). Ensenada, 24 de octubre de 2014. Disponible en:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203999308881873&set=pcb.10203999310801921&type=1&theater>

(2) "Comunicado de la Maestría en Historia y Memoria" (no disponible en internet); "Declaración del Consejo Directivo de la FAHCE ante los hechos ocurridos en

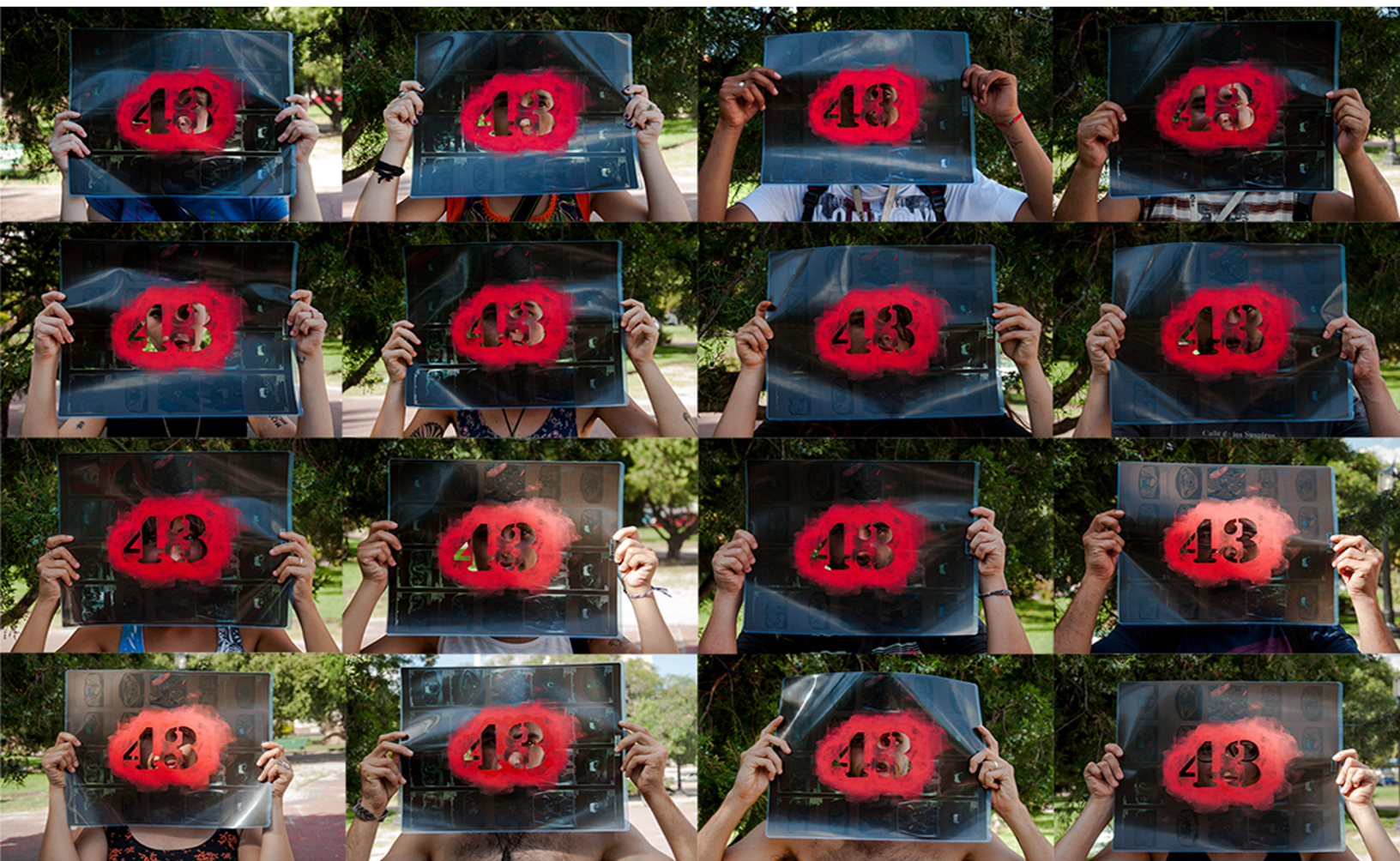
México". Ensenada, 3 de noviembre de 2014. Disponible en el sitio:

<http://www.fahce.unlp.edu.ar/institucional/descargables/declaracion-del-cd-por-mexico> y

"Pronunciamiento de la Universidad Nacional de La Plata ante la grave situación de estudiantes en México". Dirección de DDHH y Consejo Superior. La Plata, 28 de octubre de 2014. Disponible en:

<http://www.unlp.edu.ar/articulo/2014/10/28/comunicado-represion-estudiantil-mexico-oct-2014>





Fotografía: Colectivo SADO

Artículos de opinión

Ayotzinapa como tema: violencia genérica, indignación, política

Dra. Nora Rabotnikof *
Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad de México, 2015
nora.rabotnikof@gmail.com

Este trabajo no apunta a la reconstrucción de los hechos, ni a la cronología puntual de las acciones generadas a partir del 26 de setiembre. Intenta rastrear, en cambio, diferentes momentos de la construcción política del tema “Ayotzinapa” (entendiendo tema como conjunto, en principio indeterminado, de sentido). Elijo hacerlo a través de un seguimiento de la consigna Vivos los llevaron, vivos los queremos y de los deslizamientos de sentido detectables en el discurso público, través de una revisión parcial de las opiniones expresadas en la prensa escrita. El trabajo se inscribe en una preocupación más general que anima el Proyecto de Investigación Conacyt “Tiempo y Política” y trata de subrayar, por ende, una perspectiva temporal de análisis.

De la violencia genérica a la tragedia de Ayotzinapa: la indignación une

El 27 de setiembre de 2014, el periódico *La Jornada* consignaba en una de sus páginas interiores, una confusa información sobre una persecución a estudiantes normalistas ocurrida en Iguala la noche del 26. Fuentes del gobierno estatal y de la dirigencia estudiantil de la Normal Rural reportaban la muerte de al menos un alumno, dos heridos de gravedad y 20 lesionados. Según la misma noticia, el alcalde de Iguala había declarado que los estudiantes intentaban interrumpir un acto oficial, que la policía municipal había disparado al aire con propósito disuasorios y que no había habido muertos. El 28, los padres de los estudiantes reportaban ya 25 desaparecidos y 5 muertos, mientras que la procuraduría estatal

informaba de 6 muertos y 17 heridos. Ese mismo día aparecía el reporte de algunas “víctimas colaterales” del oscuro enfrentamiento: el equipo de futbol de los Avispones, cuyo ómnibus pasaba por ahí y había sido alcanzado por las balas, un taxista y su pasajera que también habían resultado víctimas mortales de la confusión (*La Jornada*, 27 y 28 de setiembre de 2014).

Estas primera informaciones, dispersas y confusas, que podían ser aún cobijadas bajo la opaca narrativa de la “guerra al narcotráfico” (incluido el proverbial episodio del enfrentamiento entre bandas rivales), es decir que podían todavía ser automáticamente leídas dentro del marco de “la violencia naturalizada” en México, se transformarían en poco tiempo en “la tragedia de Ayotzinapa,” emblemáticamente representada por las imágenes de los 43 estudiantes desaparecidos. En el periplo que va del episodio aislado a la tragedia, dos ritmos temporales diferenciados se entrecruzan y se enfrentan. Por un lado, el tiempo lento del sistema político, que procesa la información en términos de las competencias y responsabilidades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y local) y de la diferencia gobierno oposición, y que permanece entrampado en los engranajes jurídicos de una respuesta que quiere ser apegada a la legalidad. Por otro, un tiempo social que sorprende a la propia sociedad civil: una especie de chispa en la pradera que se expande rápidamente, despertando a las buenas conciencias adormecidas, convocando a las voces críticas y ocupando las calles de las principales ciudades. La



repercusión internacional es casi inmediata (1) y ello funcionará como acelerador de ambas temporalidades. Desde el sistema político, no es sorprendente que el episodio fuera leído exclusivamente bajo la óptica de la imputación de responsabilidad política: Guerrero gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el alcalde Abarca como candidato externo postulado por esa formación política, la factible y redituable posibilidad de implicar oblicuamente a López Obrador, fueron las primeras coordenadas desde las que se leyeron los hechos y se procesó el tema: un problema de Guerrero. Las autoridades estatales y el PRD, responden también con apego al procedimiento formal, como si la respuesta política pudiera derivarse de manera directa de la aplicación reglamentaria. El edil demora solo 4 días en pedir licencia (luego se lo declarará prófugo y posteriormente será detenido), el presidente de la Cámara de Diputados estatal declara que no puede librarse orden de captura porque no ha mediado juicio de desafuero. Del mismo modo, el gobernador Aguirre explica que el alcalde no se había plegado a la disposición de mando único policial y que por tanto no hay responsabilidad del gobernador. La Procuraduría General de la República (PGR) atrae el caso 12 días después y el pronunciamiento del presidente del 5 de octubre (“estoy consternado”) marcan algo así como el primer reconocimiento de la dimensión federal del asunto. La imagen pública, sin embargo, sigue siendo de desconcierto y pasmo. El Estado de Derecho y la democracia en México, no parecen tener previstas por escrito ni coyunturas excepcionales ni emergencias políticas.

El tiempo de la opinión pública y el tiempo social, tienen, en cambio, una cadencia potencialmente explosiva: la bandera de la indignación moral activa a sectores que

habían permanecido en silencio durante los años de “la guerra” y reaviva y reagrupa a las voces críticas. Las instancias institucionales de la sociedad civil (universidades, festivales, publicaciones) se suman a las expresiones de dolor y consternación. La consigna “Fuera Peña!” moviliza a algunos sectores pero también divide (2). En cambio el “Vivos los llevaron Vivos los queremos”, logra condensar el tiempo de la incertidumbre por el destino de los estudiantes, la zozobra y la esperanza de los padres, y la indignación hacia lo que se vive como un agravio general. La incertidumbre y la angustia presionan al tiempo de la investigación y abren caminos no anticipados que obligan a enfrentarse con algo que aparece ahora como un pasado que sigue estando presente: la búsqueda llevada adelante por la PGR y diferentes comités ciudadanos conduce al descubrimiento de más de 19 fosas clandestinas con restos que no corresponden a los estudiantes. Los hallazgos parecen dar, literalmente, cuerpo a las estadísticas de la guerra al narco: 25.000 desaparecidos y 100.000 muertos. Sin embargo, los muertos operan de manera paradójica sobre la experiencia colectiva: por un lado refuerzan la excepcionalidad de Ayotzinapa (vivos los queremos: pueden estar vivos), y por otro, se superponen, como una capa geológica más, al yacimiento de experiencias del horror de los principales actores del drama (3).

Dos hipótesis, no necesariamente contradictorias se impondrán luego para dar cuenta de la lenta reacción del sistema político. La primera dirá que el acontecimiento imprevisible y contingente o la consecuencia no esperada de la histórica conflictividad social, el estallido en los márgenes, toma por sorpresa a los políticos y desafía el repertorio de recursos institucionales y propiamente políticos disponibles hasta entonces. Como consecuencia, se produce una profunda



figura en el sueño del *mexican moment*, y también la ritualidad del Estado de derecho. La otra hipótesis, dirá que el tiempo largo y lento tuvo que ver con el complicado tejido de un relato encubridor, que aún en medio de la crisis de credibilidad, pudiera dejar a salvo a los principales responsables de la masacre (4).

El relato oficial y sus impugnaciones: ¿La ciencia separa?

Un mes después de los acontecimientos de Iguala, el gobernador perredista pide finalmente licencia y el Congreso nombra al rector de la Universidad gobernador interino de Guerrero. Sus antecedentes políticos y académicos le otorgan credenciales de buen negociador e interlocutor en un diálogo con los maestros del Estado, quienes para ese entonces ya han protagonizado reiteradas movilizaciones violentas en las que el tema de los desaparecidos enlaza con el conflicto de la reforma educativa y sus coletazos (5). Para esa fecha, se produce la primera reunión del Presidente con los padres de los estudiantes, y finalmente el 7 de noviembre tiene lugar la conferencia de prensa del Procurador, en la que se ofrecen las primeras pruebas científicas (que deberán ser ratificadas por el laboratorio de Innsbruck) de la muerte de los estudiantes. A partir de testimonios de los responsables materiales detenidos, policías municipales y sicarios, se unifica el relato de lo sucedido.

Podría interpretarse que este relato oficial concluye un ciclo en la historia del tema. Esto no significa afirmar que la historia oficial fuera universalmente aceptada, ni que ella reparara la credibilidad del gobierno. Por el contrario (6), las encuestas y la percepción cotidiana apuntan a un fortalecimiento del descrédito y el escepticismo generalizado, y de la condena general a la “narcopolítica”. Sin embargo, no es arriesgado interpretar

que la versión oficial “reubicó” el espacio de la incertidumbre, repolitizó la indignación moral, cambió los términos de la discusión y realineó a los actores. Si antes el “Vivos los llevaron, vivos los queremos” expresaba la angustia y la incertidumbre por el destino de los estudiantes, y se articulaba con imputaciones de responsabilidad más o menos difusas (fue el narco, fue la policía municipal y el alcalde, fue el Estado) y con explicaciones causales referidas al contexto histórico (el México violento, es Guerrero violento, es la vuelta del autoritarismo priista, es la ruptura del tejido social, es la guerra de Calderón), el reconocimiento del asesinato comenzó a alterar la inteligibilidad política de la consigna, que se transformaría a partir de entonces en una divisa de resistencia o de impugnación de la versión oficial; porque con las declaraciones del Procurador tomó cuerpo otra línea de impugnación hasta entonces solo latente en el terreno de la desconfianza: el cuestionamiento a la capacidad del Estado para encuadrar legalmente la guerra contra el narco, la debilidad de la Justicia y la improvisación y desprolijidad de los procedimientos. Pero, al lado de esta línea de impugnación (que impulsaría las acciones posteriores en la escena internacional, las críticas expertas, las iniciativas de reforma jurídica), la versión oficial introdujo una narrativa plausible en cuanto a la motivación: la masacre fue resultado de una contingencia desafortunada, los muchachos fueron a requisar los vehículos y fueron confundidos con saboteadores del acto político del alcalde, con narcotraficantes de una pandilla rival, la policía local intervino y los Guerreros Unidos -uno de los principales grupos delincuenciales que operan en Guerrero, con el que estaba familiarmente ligada la esposa del alcalde- hicieron el trabajo pesado. La explicación resultaba plausible a partir de una situación de alta descomposición social, de colusión de facto entre autoridades



delincuentes, de estigmatización local de los estudiantes, de los antecedentes de la violencia en Guerrero y de la arbitrariedad y carácter delincencial del alcalde (7). Más difícil de aceptar si se piensa en el Estado como un cuerpo monolítico, cuyo brazo represivo opera a través de una cadena de mando desde el Presidente hasta el policía municipal y que panópticamente detecta los focos de protesta social para erradicarlos de raíz.

El relato oficial no ocultaba la participación de las autoridades políticas, aunque seguía circunscribiéndolas a Guerrero y más en particular a Iguala. Y, explícitamente, descartaba “la hipótesis peor”, la de la intervención del ejército (8). Al mismo tiempo ofrecía una versión también plausible (que luego sería contestada en términos técnicos) del destino de los estudiantes: están muertos y fueron incinerados. La información provocó inmediatamente una nueva oleada de indignación, pero también un inconfesable sentimiento de alivio de la incertidumbre ciudadana. La tragedia terminaba de cerrarse, como casi toda tragedia que se precie, con las muertes.

Un primer desplazamiento en la construcción política del tema estuvo dado por la aceptación total o parcial de los resultados de la investigación, en la prensa y en la comunicación difusa, a veces incluso en términos elogiosos (9). Otras interpretaciones, aunque con señalamientos críticos a las políticas de comunicación del gobierno y en especial a la actitud y capacidad del Presidente, daban por buena o al menos por plausible la interpretación brindada. Por otra parte, la apelación a la ciencia, es decir al respaldo científico de una interpretación política, comienza a ser esgrimida de uno y otro lado. Una línea de impugnación fue la desarrollada por parte de investigadores de la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM). El argumento comenzaba con un enunciado puramente técnico científico y culminaba con una imputación al ejército. Según esta versión era científicamente imposible incinerar 43 cuerpos con los materiales que constaban en la investigación (llantas, petróleo). Dadas las características del terreno, y la temperatura requerida para el siniestro procedimiento, era científicamente imposible que las cosas hubieran sido como decía el procurador. Por lo tanto, ante esta imposibilidad científica se habrían dos posibilidades: o que se hubiera recurrido a los crematorios del ejército, ubicados en los cuarteles, o que los estudiantes estuvieran detenidos allí. No es el momento aquí de discutir la sustentabilidad científica de esta crítica. Lo interesante es más bien destacar cómo la impugnación se efectuaba desde la autoridad de la ciencia y los científicos y no como controversia pericial (como sería el caso, muy sobrio, por otra parte, del Equipo Argentino de Antropología Forense) y sobre todo la manera en que una imputación de responsabilidad criminal (al ejército) se derivaba de la imposibilidad técnica de la autoría por parte de los sicarios.

Otra línea de impugnación derivó más explícitamente de las irregularidades forenses y pronto condujo a la lucha por la incorporación de la figura de la desaparición forzada y a la actuación en los foros internacionales. Una tercera línea, más ligada al debate en el espacio público ilustrado asumió la forma de la denuncia en términos que indicaban: “Fue el Estado” o “Fue un crimen de Estado” (10). La discusión mostró varias singularidades: la deficiente tipificación jurídica mexicana así como la histórica confusión entre Estado y gobierno, o la caracterización del Estado exclusivamente como represión. El procurador Murillo Karam tendrá también que respaldar “científicamente” sus afirmaciones: en intervenciones posteriores apelará a



respaldo de los biólogos para sustentar la localización de la fogata y se referirá a la imputación jurídica a los autores como “la verdad histórica”.

La metáfora espacio temporal del parteaguas, muchas veces socorrida en el debate público mexicano es la única referencia que parece generar consenso. La tragedia de Ayotzinapa es un parteaguas histórico, sin que sea necesario aclarar cual es el antes y el después. En la versión oficial parece ocupar el lugar de paso entre un México en el que la tragedia (todavía) fue posible a un México en el que el Estado de Derecho se vuelva una realidad y la vigencia de la ley torne imposible la repetición de este tipo de sucesos. En otras versiones es el parteaguas que marca el fin del miedo y el despertar de la sociedad civil. La efervescencia social inaugura una nueva época: la de la posibilidad de una refundación republicana o la de una sociedad sin miedo que reniega de sus representantes y encuentra nuevas alternativas. En otros casos, el parteaguas (México ya no será el mismo) refiere a una herida abierta y a un agravio, uno más, que se suma a la larga historia de arbitrariedad y impunidad de la autoridad.

Más allá de las distinciones o confusiones conceptuales, el desarrollo de la investigación introdujo una cuña de sentido en la capacidad convocante de la consigna “Vivos los llevaron”. El tiempo de la interpretación se polarizó entonces en dos invocaciones temporales. El mensaje oficial instaba a aceptar “la verdad histórica”, dejar atrás la tragedia y mirar hacia el futuro, en una especie de elaboración *fast track* del duelo (11). No quedarse fijado en el pasado (a cuatro meses del acontecimiento), y no temer al futuro. Por parte de los sectores nucleados alrededor de los padres, persistirá la consigna original. Pero “vivos los llevaron”

pasó de ser casi exclusivamente expresión del dolor y de la negación del horror, a significar entonces el rechazo a la versión oficial sobre la muerte. Ello se tradujo en estrategias tales como la demanda por la apertura de los cuarteles, la convocatoria a proseguir la búsqueda de los estudiantes vivos. La persistencia generó cierta perplejidad (pedir que aparezcan vivos no es pedir justicia). Aunque se podría seguir leyendo en la consigna la tenacidad de la esperanza, o la expresión de la resistencia, para otros comenzó a tratarse de un gesto ritual o del signo de una cierta impotencia política. Lo cierto es que los representantes jurídicos y asesores de derechos humanos comenzaron a verse obligados a aclarar el sentido de la consigna en términos de las irregularidades de la investigación y de la respuesta gubernamental (12). Solo un sentido y una intencionalidad resultan irrefutables y desbordan los términos de la consigna para condensarse para siempre en los rostros y los nombres de los muchachos: frente a la vorágine de acontecimientos que escanden el tiempo político y movilizan la atención... no olvidar a los 43.

Memoria e instituciones: la política enfrenta

El 27 de febrero de 2015 se desarrolló la Novena Jornada Global por Ayotzinapa. Ese día *La Jornada* consignaba que, a 5 meses de la desaparición, los padres habían encabezado la marcha “con un llamado a la sociedad civil para que no los deje solos y no permita que el caso quede en el olvido”. Y es que el número de manifestantes, pero sobre todo su composición social (Coordinadora de Trabajadores de la educación de Guerrero – CTEG-, otros sindicatos muy golpeados por la política de los últimos años, algunos contingentes estudiantiles) parecerían indicar que, a primera vista, Ayotzinapa había dejado de ser el eje movilizador de la



sociedad civil para transformarse en reclamo exclusivo de los padres y sobre todo en una consigna del accionar político de la CTEG (lucha gremial, protesta violenta, retórica de enfrentamiento frontal). El reclamo fue dirigido a la intención de cerrar el caso, pero también podría interpretarse como un reproche velado hacia ese sujeto voluble y casquivano, manipulable y sobre todo olvidadizo: la sociedad civil. Una sociedad civil que habría atemperado la intensidad de la indignación moral, pero que sobre todo habría realineado sus posiciones ante las sucesivas resignificaciones del tema.

Y es que Ayotzinapa como tema parece registrar un nuevo encuadre político ante el horizonte temporal de las próximas elecciones intermedias. El endurecimiento del activismo normalista condujo del más o menos inarticulado “Fuera Peña” al “No a las elecciones” (13). Esto se une a la situación particular de Guerrero (y de otros estados que podrían ser declarados en emergencia electoral) a la estrategia explícita de la CTEG de impedir físicamente las elecciones en ese estado, a la fragilidad del gobierno interino, las movilizaciones violentas por los salarios retenidos (saldos de la reforma educativa aprobada en 2013). En apariciones recientes y retomando una antigua denuncia, los padres de los normalistas denunciaban a los partidos que intentaban utilizar la tragedia con intenciones electoraleras y llamaban “a no votar por ninguno, o a anular el voto porque son todos iguales”. Hasta aquí el “no a las elecciones” parece recoger tanto el descrédito generalizado de los políticos, la desafección ante la corrupción e impunidad puesta en evidencia, como una cierta vocación antipolítica de la sociedad civil reforzada por la relativa pobreza de la oferta electoral. Sin embargo, la situación del Estado construye un escenario de extraordinaria conflictividad y explosividad para el acto electoral. El Instituto Nacional

Electoral se vio obligado a autorizar medidas extraordinarias para enfrentar el “elevado nivel de encono y riesgo que prevalece en todas las secciones electorales” de Guerrero, mientras la CETEG anunciaba nuevas medidas para bloquear el proceso electoral, movilizándose “por la aparición con vida de los estudiantes y el pago de los salarios retenidos”. En este panorama, los padres seguirán privilegiando la difusión de la tragedia en foros internacionales, es decir una línea de acción, hasta cierto punto, diferenciada y autonomizada de las urgencias electorales. Sin embargo, el acompañamiento permanente de dirigentes de la CTEG la adopción de su léxico, los vuelven, en ocasiones, indiferenciables para un sector de la opinión pública. Ello lleva, por supuesto, a que ciertas publicaciones denuncien la manipulación política a la que son sometidos los familiares o de manera más matizada (y más situada) a interpretar que “una bandera legítima es incluida en una línea de confrontación extrema donde se pierde todo”.

Desde la perspectiva del sistema político, daría la impresión de que Ayotzinapa quedó atrás, que vuelve el tiempo de la “normalidad democrática”, un tiempo, ahora sí, ilustrado por el aprendizaje de la tragedia. Pero el saldo de este aprendizaje político no es para nada evidente. Las recomendaciones de los organismos internacionales fueron, en un principio, tomadas como señalamientos críticos que ponían en duda la buena voluntad, la idoneidad técnica y los logros obtenidos por el gobierno. Casi siempre, la primera reacción es la descalificación de los expertos o la queja ante la incomprensión de los organismos internacionales, lo cual habla de un cierto provincialismo o ignorancia de la dinámica de las instancias humanitarias globales. Tampoco se han llevado a cabo las acciones de fortalecimiento económico y social anticipadas por el presidente



derivadas que un diagnóstico que ponía en el eje en el atraso económico y social de Guerrero y en general del Sur. La caída de los precios del petróleo y la política de ajuste pueden explicar la demora, aunque pareciera que otras prioridades de la agenda económica desplazan la atención del gobierno. Las reformas legales en cuanto a víctimas y desapariciones forzadas avanzan lentamente y las iniciativas políticas tendientes a enfrentar las acusaciones de corrupción, por ahora rayan en lo ridículo (14).

Ninguno de los partidos del Pacto por México parece incorporar en sus programas algún aprendizaje derivado de Ayotzinapa o demandas específicas ligadas al caso, más allá de las genéricas referencias al fin de la impunidad y la corrupción. Morena, por su parte, intenta distinguirse del descrédito de los partidos poniendo énfasis en la calidad moral de sus candidatos, en la vigilancia y certificación de inexistencia de lazos con el narcotráfico, y en el carácter ciudadano de los mismos. Y, en sus versiones más refinadas, algunos ven en la posible combinación de movilización callejera, indignación ciudadana y competencia electoral, la posible emergencia de un PODEMOS mexicano. Habría que preguntarse si más allá de la lectura ingenua en términos de recetas política que pueden copiarse (algo similar ocurrió en un sector de la izquierda mexicana con el término Socialdemocracia), y más allá de los componentes aislados susceptibles de comparación (en ambos casos hubo indignación, en ambos casos desafecho, y nosotros también tenemos jóvenes académicos y enfatizamos la democracia participativa) la esperanza no pasa por alto la inexistencia, en estos momentos, de un referente político general que pueda articular la diversidad de reclamos y demandas, otorgándole una orientación de futuro,

reconectando legalidad y demandas sustantivas, procedimientos y calle, democracia y movilización popular, sistema político y ciudadanos. Una ilusión similar informa a quienes rescatan la efervescencia social de las primeras movilizaciones y la transforman en plataforma de una refundación republicana, basada en la diversidad y el pluralismo (15).

Reflexiones finales

Coda: Tal vez nunca se sepa a ciencia cierta (entre otras cosas porque la ciencia cierta de los físicos y los biólogos ha mostrado sus límites) qué ocurrió en Iguala la noche del 26 de setiembre. Tal vez haya que esperar muchos años y muchos cambios hasta la desclasificación de archivos o la aparición de nuevas pistas. Uno intuye que mucho de lo que falta aclarar se relaciona con la "hipótesis peor" del discurso del Procurador (el papel del ejército) y duda, de manera prudente o timorata, de la oportunidad y la viabilidad política de develarla en estos momentos. Aunque la vía de las imputaciones personales ya esté abierta.

Por lo pronto, sabemos que la indignación suscitada por la tragedia y la intensidad de la movilización ciudadana hicieron trastabillar el vocabulario político del Estado de derecho y la democracia representativa, su ritualismo vacío y su capacidad para encubrir o neutralizar la voluntad y la decisión políticas. Pero si el lenguaje del dolor y la indignación tuvo esta innegable impacto crítico, como no podía ser de otra manera éste fue refuncionalizado o traducido a los discursos disponibles en el espectro político mexicano (el discurso de la resistencia, de la diversidad, el de la legalidad plena) con todas sus tensiones. No parece haberse generado un nuevo léxico ni una nueva óptica desde la cual evaluar la maltratada transición mexicana o los horrores de la guerra sucia,



denunciar la exclusión o tipificar la crisis. Por supuesto, esto no es imputable a los padres, que con tenacidad y entereza recorrieron el país, se presentaron en foros nacionales e internacionales y siguen enarbolando las fotos de los muchachos como un lacerante recordatorio. Los padres no pueden ser, pese a algunas ingenuas expectativas iniciales, los articuladores de una voluntad política colectiva de nuevo cuño (ni siquiera de una que se imagine a sí misma como red de experiencias locales de base comunitaria) (16). La indignación moral puede mover multitudes, pero dura poco tiempo. Porque no hace falta ser leninista (y creer que solo la organización en un partido vence al tiempo) para sospechar que la gente se cansa, que la sociedad civil más que un sujeto organizado y unido a través de consensos participativos procedimentalmente fijados, es a menudo nada más (y nada menos) que la aparición pública de ciudadanos y organizaciones diversas (y en ocasiones enfrentadas por otras cuestiones) y que pocas consignas logran articular, en momentos claves, demandas e identidades diferentes, experiencias disímiles y expectativas difusas. Otra vez, quizá con tiempo, Ayotzinapa como experiencia colectiva de agravio, decante en una transformación de las expectativas, logre dar sustento a nuevas esperanzas o genere diagnósticos que apunten a proyectos y programas que encaucen el pesimismo. Por ahora, Ayotzinapa pasa, muy rápido, a formar parte de la memoria. Y no sabemos cuál será el futuro de esa memoria (17).

Notas

* Nora Rabotnikof es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y desde hace muchos años investigadora en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus trabajos

se preocupan por pensar el espacio público y las formas de lo político desde la filosofía política. Ha publicado en distintas revistas académicas y de sus libros se destacan: *Max Weber: desencanto, política y democracia* y *En busca de un lugar común: el espacio público en la teoría política contemporánea* y, en colaboración *La tenacidad de la política* y *En busca del pasado perdido*. Actualmente dirige el proyecto colectivo titulado "Política y tiempo".

(1) El 3 de octubre, la Organización de Naciones Unidas (ONU) en México condenó la desaparición de 43 estudiantes y la violencia de que fueron víctimas, además de considerar este hecho como de los más terribles de los tiempos recientes. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió al gobierno de México que tomara medidas de protección en favor de los desaparecidos. <http://noticias.univision.com/article/2143700/2014-10-04/mexico>.

(2) La consigna parece haber surgido espontáneamente en la movilización, en una imputación directa de responsabilidad al régimen. López Obrador pide la renuncia del presidente y demanda que esta tenga lugar antes del 2 de diciembre, fecha en la que se cumplen dos años del gobierno de Peña (y límite temporal para un nuevo llamado a elecciones). La demanda se sustenta de la denuncia por la ilegitimidad de origen del presidente (el fraude de 2010) y no en la crítica a la parálisis decisional en la coyuntura.

(3) En los análisis sobre las grandes catástrofes siempre aparece el elemento de lo no anticipable, lo no predecible, del límite de lo nunca antes experimentado por parte de los afectados, con la consecuente carencia de categorías para pensar y por supuesto anticipar el horror. Un eje para reflexionar sería el modo en que la difusión de los desaparecidos en los años 70 en



Guerrero (conocimiento presente en la memoria biográfica de los padres,) y más cerca en el tiempo, el hallazgo de las fosas anónimas fue incorporado o no en las expectativas de hallar con vida a los muchachos.

(4) Es decir, a tenor de esta denuncia, “se trataría de un ataque premeditado del la Policía Federal y el Ejército contra la estructura ideológica de la Escuela Rural”. Revista *Proceso*, 28 de octubre de 2014.

(5) La Reforma Educativa formó parte del paquete de medidas estructurales acordadas en el marco del llamado Pacto por México (PRI, PAN y PRD). Dicha reforma constitucional incluía la creación del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, (encargado de aplicar las pruebas internacionales de calificación) del Servicio Profesional Docente (carrera docente e ingreso por concurso de oposición) y otra serie de medidas como la autonomía de gestión de las escuelas. La reforma no parece haber tenido un proyecto educativo claro, ni en términos de los mecanismos para cumplir el objetivo declarado de elevar la calidad, ni en el sentido de solventar del rezago de amplios sectores. El objetivo político fue arrancar la conducción de la educación al Sindicato Nacional de Trabajadores y alterar radicalmente la situación laboral de los docentes. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se enfrentó abiertamente a dicha reforma denunciándola como una iniciativa de flexibilización laboral “Donde antes había corporativismo gremial, ahora habrá una combinación de fuerzas del mercado, desregulación laboral y autoritarismo de funcionarios educativos” (*La Jornada*, 3 de setiembre de 2013).

(6) La encuesta de Parametría de noviembre consignaba que 7 de cada 10 mexicanos “creen que no se hará justicia.

(7) “Lo que más me induce a aceptar la versión de Murillo es la insólita debilidad de

las teorías alternativas, sobre todo en lo tocante al móvil. No veo por qué el Ejército o la Policía Federal o la de Iguala quisieran matar a los normalistas o los tendrían escondidos; tampoco entiendo el sentido de una supuesta marcha de los normalistas a la guerrilla. Ninguna tiene pies ni cabeza; su único fundamento radica en la incredulidad frente a la versión oficial” (Jorge Castañeda, *Milenio*, 29 de enero de 2015).

(8) “Que hubiera pasado si el Ejército hubiera salido en ese momento, a quien hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad, hubiera sido peor, mucho peor. Qué bueno que no salió!” (Intercambio del Procurador con periodistas). Y comenta Ricardo Raphael: “De haber participado las Fuerzas Armadas en la masacre del 26 de setiembre, el daño a las actuales instituciones nacionales sería irremediable” (“La hipótesis peor”, *Milenio*, 9 de enero de 2015).

(9) “No recuerdo una exposición más completa, ni más aterradora, de un crimen. Desde luego, no existió después del 2 de octubre de 68, ni al día siguiente del ataque de los Halcones en San Cosme el 10 de junio de 71. Más recientemente: no hubo nada parecido después de los crímenes de Acteal, de Aguas Blancas, de los migrantes ejecutados en San Fernando. La sombra de la duda sobre la versión que ofreció el procurador Murillo Karam arroja a la vida pública un balde de agua sucia, ante un crimen por el cual se han detenido a autoridades, policías, sicarios. Casi toda la línea intelectual y práctica del delito ha sido consignada. Y aun así, una zona abundante de la sociedad mexicana duda sin dudar de sus dudas” (Rafael Perez Gay, *Milenio*, 28 de enero de 2015). Ver también Aguilar Camín, Hector “La dura verdad de Iguala”, *Milenio*, 26 de enero de 2015.

(10) “Lo que el Presidente llama “el orden municipal” forma parte del ordenamiento general de las instituciones del Estado. Si esto es así la reconocida participación de los



cuerpos policiales de Iguala en tales actos de Barbarie confirma la configuración de esos actos como un crimen de Estado, cometido por instituciones municipales del Estado Nacional” (Adolfo Gilly, “El crimen, la tragedia y el discurso”, *La Jornada*, 24 de octubre de 2014). “Un crimen de estado tiene características que lo distinguen y, con toda su gravedad, Ayotzinapa no las comparte” (María Amparo Casar, “¿Crimen de Estado?” *Excelsior*, 12 de noviembre de 2014).

(11) “No debemos quedar atrapados en el caso Ayotzinapa”. Declaraciones del Dr. Narro, *La Jornada*, 27 de enero de 2015.

(12) Vidulfo Gonzalez, representante legal de los familiares se verá obligado a aclarar en repetidas ocasiones que la indagatoria no es concluyente y que hay al menos 10 puntos que no han sido esclarecidos y que no hay certeza científica para asegurar que los normalistas fueron asesinados.

(13) Bartra Armando, “Votar o no votar: ¿he ahí el dilema?”, *La Jornada*, 8 de Febrero de 2015.

(14) Destaca en este sentido, además de la rehabilitación de la secretaría de la función pública, el nombramiento de Medina Mora en la Corte Suprema y el conflicto a raíz del despido de la periodista Carmen Aristegui.

(15) Esteva Gustavo “El lugar de la esperanza”, *La Jornada*, 16 de febrero de 2015.

(16) “Los familiares de los estudiantes nos han permitido vivir junto a ellas y ellos es drama que conmueve profundamente y experimentar a su lado una forma de respuesta que no se hunde en la desesperación”, *ibíd.*

(17) En la época de la cultura de la memoria, existen varios posibles encauzamientos y formas de institucionalizar la memoria: la musealización, una comisión de la verdad, la recopilación testimonial, el revisionismo, la sacralización de la consigna.



Ayotzinapa en el contexto de la restauración autoritaria en México

Mgter. Adrián Velázquez Ramírez*
IDAES-UNSAM/CONICET
La Plata, 2015
adrian.velaram@gmail.com

Introducción: lo que se fue con los que se llevaron

El objetivo de estas líneas es ofrecer algunas coordenadas que le permitan al lector ubicar la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 dentro del proceso político mexicano de las últimas décadas. En efecto, lo ocurrido en Ayotzinapa –Guerrero– no es un caso aislado sino una tragedia que, con actores, escalas y magnitudes diferentes, se ha repetido a lo largo de los últimos años en el escenario mexicano. En junio de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció estar investigando 2.443 casos de desaparición en los cuales hay evidencia de una posible participación de agentes del Estado (1). Por su parte, el informe de Human Rights Watch, *Los Desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada*, documenta 250 casos de desapariciones de los cuales 140 se encuentran catalogados como “desapariciones forzadas”, es decir, se encontró evidencia de participación directa o indirecta del Estado (2). En junio de 2013, la Procuraduría General de la República dio a conocer una lista de personas desaparecidas durante 2006-2012. Sin hacer distinción de las causas probables de desaparición, el número de aquella lista ascendía a 26.121 personas (3). Otras investigaciones señalan que tan sólo en los dos primeros años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2013-2015) se sumaron a esa lista otros 9.384 casos (4).

Lo sucedido en Ayotzinapa ha quedado grabado en la memoria colectiva por la intensa movilización que generó. Las marchas de los días y semanas posteriores congregaron a miles de personas a lo largo del país. Explicar por qué Ayotzinapa logró aglutinar tal respuesta en comparación con lo sucedido respecto a otros cientos o miles de casos de desaparición forzada, tal vez sea una empresa imposible. Sin embargo, arriesgamos una hipótesis: Ayotzinapa cristaliza el abandono de una promesa. Cada vez más se piensa el actual presente mexicano como una “restauración autoritaria”. La sensación que se impone es que la llamada transición a la democracia ha fracasado, lo cual nos lleva a experimentar la situación como un regreso al pasado.

El concepto de “restauración autoritaria” ha ganado resonancia en el espacio público para explicar el actual estado de cosas en México. Sin duda, el hecho de que luego de doce años el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresara a la presidencia de la República tiene mucho que ver con la significación dada a este término. Sin embargo, creemos que sería errado interpretar que el autoritarismo era una cuestión del pasado que el PRI trajo consigo de regreso. Es evidente que el autoritarismo en México nunca se fue; tampoco sería preciso decir que se mantuvo en forma latente, pues aún durante las administraciones panistas las prácticas



autoritarias siguieron siendo constitutivas del régimen político mexicano y común a la gran mayoría de partidos políticos. ¿Por qué se experimenta lo que ocurre actualmente en México como una restauración? Consideramos que ante la crisis de la promesa democrática, el autoritarismo aparece con toda su crudeza y objetividad y se nos presenta sin los matices que introducía la posibilidad de su futura superación. Lo que restaura el autoritarismo en México es precisamente la sospecha compartida de que aquella transición a la democracia dejó intacto el conjunto de prácticas y mecanismos autoritarios. Ayotzinapa es el recordatorio de la persistencia de un pasado que creímos haber dejado atrás.

Los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos cierran con clavo y sangre una etapa del proyecto democratizador en México. No porque la democracia sea un imposible o porque lo conseguido durante este proceso de transición sea del todo desdeñable; sino porque es necesario revisar los alcances y limitaciones de la forma concreta que adquirió aquella promesa en la cual la ciudadanía mexicana había puesto enormes expectativas. En esta tarea resulta inevitable mirar aquel proceso bajo el sesgo de un presente muy poco alentador. Sin embargo, es necesario situarse críticamente y hacer la genealogía de lo que hoy se nos muestra como un fracaso. Las presentes líneas tienen como objetivo una primera revisión de este proceso. Partiendo de una crítica histórico-conceptual intentaremos mostrar que la interpretación que dominó al proceso de transición democrática terminó por limitar los alcances del pasaje autoritarismo/democracia. En este sentido resulta particularmente relevante el papel poco notable que ocupó la cuestión de los derechos humanos dentro de una concepción de la transición que interpretó la

democratización como apertura del sistema político.

El concepto de transición democrática en México

En Agosto de 1990, durante un foro que congregó a intelectuales de gran renombre, Mario Vargas Llosa y Octavio Paz discutían sobre el lugar que ocupaba el régimen mexicano en relación a las dictaduras militares latinoamericanas (5). Para referirse a la habilidad del PRI para vestir su autoritarismo con ropajes democráticos, el escritor peruano acuñó la frase: "México es la dictadura perfecta". En su respuesta, Paz intentó precisar los términos al indicar que en México no había una dictadura, sino un régimen de dominación hegemónico. También reconocía que si bien a diferencia de otras dictaduras el régimen mexicano nunca suprimió a la sociedad civil, el PRI sí había mostrado una inigualable capacidad para manipular e intervenir este ámbito civil. La réplica de Paz concluía afirmando que, respecto a la democratización del régimen: "la lucha actual en México es la lucha por el pluralismo" (6).

México ocupó un lugar un tanto descolocado en relación al ciclo de dictaduras latinoamericanas. La sutileza del autoritarismo mexicano sólo contrastaba con su innegable objetividad, con su efectividad para reprimir, censurar y cooptar. El PRI gobernó durante 71 años y desde 1934 todos los presidentes fueron electos, cumplieron su mandato y entregaron el poder a su sucesor acorde a lo establecido en la Constitución. Esta ambigüedad que caracterizó el autoritarismo en México se trasladó cuando en el resto del continente se discutía sobre la transición a la democracia.

En México se leyó y se estudió con esmero la gran producción académica en torno a las



transiciones democráticas. El concepto de “transición” se incorporó al análisis de la realidad mexicana y pronto ganó su acta de naturalización; actores políticos y civiles acudieron a él para articular un proyecto de transformación política que prometía una ruptura con el pasado. Sin embargo, mientras que en los países que habían experimentado dictaduras militares la transición significaba el traspaso de gobiernos *de facto* a gobiernos civiles elegidos democráticamente, en México la interpretación que dominó fue la que manifestaba Octavio Paz en 1990; es decir, que se tomó la cuestión del pluralismo como piedra angular de la transición a la democracia. Desde este punto de vista, sería la apertura política del régimen y su transformación en un sistema de partidos competitivo el mecanismo que desencadenaría un proceso de democratización más amplio. Bajo esta particular recepción del concepto de transición fue que se asentó un proyecto de democratización que privilegió ciertas discusiones respecto a otras. En relación con el resto de transiciones a la democracia en América Latina, es notable que la discusión sobre los derechos humanos ocupara un lugar secundario.

En efecto, la discusión en México sobre la “transición a la democracia” tendió a ocluir una dimensión que resulta fundamental en el pasaje de un régimen autoritario a uno democrático. En relación con otros tópicos, la poca importancia concedida a los derechos humanos impidió asentar tanto una nueva sensibilidad social y política sobre la violencia de Estado, así como un marco institucional y jurídico que pusiera fin a un conjunto de prácticas ampliamente extendidas en el espacio político mexicano. Esto se reflejó también en el papel que ocupó la cuestión de la justicia por las víctimas de la represión de Estado en la transición a la democracia en México.

Tal vez el ejemplo que mejor ilustra la deriva de la discusión en torno a los derechos humanos durante la transición a la democracia sea lo ocurrido con la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) creada durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006). En pleno proceso de apertura del régimen, el discurso de los derechos humanos encontró una ventana de oportunidad para hacerse escuchar; sin embargo, el entusiasmo duró poco. Con motivo de los 30 años de la matanza de Tlatelolco de 1968, un grupo de ex militantes estudiantiles que participaron en las movilizaciones de aquellos años interpuso una querrela contra el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de gobernación – y posterior sucesor en la presidencia- Luis Echeverría Álvarez. La causa los señalaba como responsables de la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968, acusándolos de genocidio, privación de la libertad y abuso de la autoridad. Si bien la querrela fue rápidamente desestimada por el juez de turno alegando la prescripción de los delitos, con la salida del PRI del poder y la llegada del panista Vicente Fox se retomó la demanda por justicia y se creó la FEMOSPP. El objetivo de la Fiscalía era revisar lo ocurrido durante la llamada “guerra sucia” en la década de los sesenta y setenta y fincar responsabilidad penal a quienes resultaran responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.

A finales de su sexenio en 2006, Vicente Fox anunciaba en una entrevista con la BBC que las actividades de la FEMOSPP llegarían a su fin con la presentación de un informe final (7). Dicho informe no sólo nunca conoció la luz pública de manera oficial (8), sino que, irónicamente, la Procuraría General de la República afirma que las ochocientas páginas en las que se resume el trabajo de la



Fiscalía se encuentran “desaparecidas” (9). El tímido intento por establecer una ruptura con las prácticas autoritarias fracasó por razones que excedían a los miembros de la propia Fiscalía (10). Al tiempo que la Fiscalía naufragaba en un laberinto burocrático y jurídico, la desaparición de personas siguió siendo una práctica recurrente que inevitablemente caía en un ámbito de impunidad que refleja las anchas veredas de continuidad con el pasado autoritario por las cuales caminó la transición a la democracia. La poca voluntad y capacidad para procesar el pasado significó sacrificar el futuro democrático prometido.

Sin negar lo fundamental de la cuestión sobre el pluralismo, la discusión sobre la apertura política desplazó a un segundo término temas fundamentales que dejaron intactas estructuras y prácticas en las que se asentaba el autoritarismo en México. Fue la apertura del sistema político a otras fuerzas políticas y no una crítica al ejercicio del autoritarismo como tal, lo que dominó el programa de acción de la transición a la democracia.

Esta particular interpretación del concepto de transición a la democracia es la que consideramos entra en una crisis irreversible ante la situación de violencia generalizada y de violación sistemática de los derechos humanos. Su fracaso no sólo tiene que ver con la definición que el concepto de transición adquiriría y que sin duda le imprimió determinados sesgos; también resulta fundamental el conjunto de decisiones y rumbos tomados en las últimas décadas. El proceso de apertura política efectivamente entregó un sistema político más competitivo - aunque el PRI siguió dominándolo-, pero esto no significó una transformación de las estructuras autoritarias del Estado. Por el contrario, estas estructuras mostraron ser lo suficientemente flexibles como para que

otros actores políticos y sociales las utilizaran.

De la transición democrática al narco-Estado: la subversión del argumento pluralista

Es innegable el papel que jugaron los partidos políticos de oposición, así como de los distintos movimientos sociales en la apertura experimentada por el régimen político mexicano en las últimas décadas. Sin embargo, esto no significó que el PRI perdiera su lugar privilegiado para conducir la transformación del sistema político. El lento proceso de apertura política estuvo dirigido y ejecutado desde la estructura del partido. La reforma política de 1977 y la amnistía a los procesos políticos de la “guerra sucia” promovida por Jesús Reyes Heróles, entonces secretario de gobernación del presidente López Portillo (1976-1982), es vista como un primer impulso a la transición democrática mexicana. Sin embargo, sería mucho más tarde, allá por el año 2000, cuando México encontraría una fecha para fijar su propia transición. La derrota del PRI y la llegada a la presidencia de Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) fue tomada como evidencia irrefutable de que la transición a la democracia entraría a una etapa decisiva. Quisimos ver ahí el momento fundante de la democracia mexicana y consagramos la alternancia partidista como un signo inequívoco de la tan anhelada democratización.

Sin embargo, el cambio de nombres en el titular del ejecutivo dejó intacta la estructura autoritaria del Estado mexicano. El gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y luego el de Felipe Calderón (2006-2012) prefirieron hacer uso de esas estructuras antes de asumir el costo político de dismantelarlas. La tentación era muy grande: la afinada maquinaria autoritaria estaba ahí para



gobernar. A la omisión culposa de no haber querido realizar un programa de gobierno transicional que implicara una profunda transformación del Estado, se le sumó otro error histórico. Las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón eligieron a Andrés Manuel López Obrador como el verdadero enemigo de la democracia mexicana, subestimaron a un PRI que pese a la derrota siguió siendo un factor decisivo de gobierno y enfocaron sus energías en usar las estructuras del Estado para impedir que un gobierno de izquierda fuera elegido democráticamente en México. Las elecciones de 2006 cubrieron bajo un manto de sospecha la solidez del sistema electoral y atestó un golpe al proyecto de democratización tal como se había planteado.

A la falta de claridad de los gobiernos panistas para definir una agenda de gobierno acorde a la tan esperada transición, se le agregó la guerra contra el narcotráfico. El lastre en materia de derechos humanos significó que el combate frontal al crimen organizado se diera en un marco de opacidad, impunidad y corrupción. Pronto fue evidente que las propias corporaciones estatales encargadas de combatir al crimen organizado eran parte del problema. De la breve expectativa que generó la alternancia inmediatamente pasamos a la cruda realidad que nos ofrecía un contexto de violencia generalizada. El Estado mexicano actual parece más una amalgama de poderes fácticos locales, regionales y nacionales articulados bajo un consenso de impunidad y protección entre las diferentes fuerzas políticas, que aquel que nos prometió entregar el proyecto democratizador.

Ante esta situación, las elecciones de 2012 le ofrecían al PRI la oportunidad de administrar el infierno que había colaborado a desatar. El argumento sobre los beneficios que debía

traer el pluralismo político al interior del sistema político dio un giro perverso: la competitividad entre fuerzas políticas había traído la fragmentación de estos poderes fácticos articulados en el Estado, lo cual había favorecido las condiciones para llegar a la situación de violencia generalizada. Se afirmaría, por ejemplo, que con la alternancia en el Poder Ejecutivo se había perdido la capacidad de disciplinar a los gobiernos estatales. La federalización devino feudalización y aumento en la capacidad discrecional de las gubernaturas locales para pactar con el cártel de la droga de preferencia, instalando con ello múltiples campos de batalla en el territorio (11). Más allá de que el análisis pueda tener su cuota de verdad, lo interesante es notar cómo en estos últimos años el papel adjudicado al pluralismo se subvirtió. El voto al PRI no fue un voto por el proyecto democratizador, sino por la vuelta de un partido que había mostrado gran capacidad para gestionar la estructura autoritaria del Estado. La solución al fracaso de la transición era un regreso al pasado. ¿Es el concepto de narco-Estado el destino final de aquella promesa de democratización?

Conclusiones: la respuesta gubernamental y las posibilidades de una nueva agenda transicional

El presente ensayo ha querido plantear algunas líneas interpretativas en relación al proceso de democratización en México. Si bien es necesario ahondar en la revisión de este proceso, consideramos que tal tarea se impone como un paso necesario ante la crisis de ciertas interpretaciones que dominaron la transición a la democracia a la luz de lo ocurrido en Ayotzinapa. En este sentido, reposicionar el tema de los derechos humanos como una forma de procesar esta tan anhelada ruptura entre autoritarismo y



democracia debe ser un objetivo de primer orden.

La masiva indignación que despertó la desaparición de los 43 estudiantes ha puesto las energías sociales en marcha. Sin embargo, es necesario que esta indignación se traduzca en una intervención política efectiva. El camino aún está abierto y nada determina que este caso sea el recomienzo del proyecto democratizador en México. Muestra de ello es la respuesta oficial ante la desaparición de los 43 estudiantes. Dos meses después de lo ocurrido en Ayotzinapa el presidente anunció un conjunto de reformas en materia de seguridad. Llama particularmente la atención que en dichas reformas se prevea la prerrogativa del gobierno federal para intervenir aquellos municipios sospechados de estar infiltrados por el crimen organizado. Sin una profunda transformación del Estado y el desmantelamiento de sus estructuras autoritarias, esta prerrogativa sólo centraliza aún más el poder en manos del Ejecutivo. En este punto, la respuesta estatal termina por reafirmar la “restauración autoritaria”.

Notas

* Adrián Velázquez Ramírez es Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Iberoamericana de Puebla y Magister en Ciencias Sociales (FLACSO, México). Actualmente es becario de doctorado de CONICET y se encuentra realizando su tesis de Doctorado en Sociología en el Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM, Argentina), en torno al proceso de transición democrática en Argentina desde un enfoque histórico-conceptual.

(1) “En México, 2.443 casos de desapariciones forzadas: CNDH” (*El Economista*, 5/05/2013). Disponible en:

<http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/06/05/mexico-2443-casos-desapariciones-forzadas-cndh>

(2) Human Rights Watch (2013), *Los Desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada*. Disponible en: www.hrw.org/node/113779

(3) “Posee el gobierno lista de más de 26 mil ‘personas no localizadas’” (*La Jornada*, 27/02/2013). Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2013/02/27/politica/011n1pol>

(4) “Con Peña Nieto, 13 desaparecidos al día” (*Proceso*, 7/02/2015). Disponible en: <http://www.proceso.com.mx/?p=395306>

(5) *El Encuentro Vuelta: la experiencia de la libertad se realizó en la Ciudad de México entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre de 1990*. Una reseña del encuentro se puede localizar en: <http://www.revista.unam.mx/vol.9/num10/art78/int78-2.htm>

(6) Un video del intercambio está disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=TiqSor5xtOc>

(7) En una carta abierta escrita por tres colaboradores del informe (Alberto López Limón, José Luis Moreno Borbolla y Agustín Evangelista Muñoz) da cuenta de las sospechas sobre el destino del informe final. En su último punto, la carta afirma: “Exigimos se publique y difunda ampliamente el Informe a la sociedad en su versión final, el cual se entregó al Fiscal Especial el 15 de diciembre del 2005, y el que se entregó al Presidente Vicente Fox, por parte de la fiscalía. El Informe tiene un destinatario unívoco: la sociedad mexicana. Así como el mecanismo que se propone para continuar la labor de reconstrucción histórica de ese período de la vida nacional.” La carta se encuentra disponible en:

https://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/letter_limonetaltofox.pdf



(8) Existe un borrador de dicho informe que trascendió por canales no oficiales.

Disponible en:

<https://itacate.wordpress.com/informe-historico/>

(9) “En la PGR “no existe” informe de la FEMOSPP sobre actos de lesa humanidad” (*La Jornada*, 28/08/2007).

(10) Para un análisis del caso, ver: Silvia Dutrénit Bielous y Libertad Argüello Cabrera, “Una gestión atrapada. El caso de la FEMOSPP” en Castañeda, Fernando, Cuéllar, Angélica y Kuri, Edith (2011), *La crisis de las instituciones políticas en México*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

(11) Por ejemplo, este argumento aparece en: Jo Tuckman (2012), *Mexico: democracy interrupted*, Yale University Press.





Fotografía: Andrea Raina

Crónicas latinoamericanas

Ayotzinapa y nuestros pueblitos perdidos

Claudio Alvarado Lincopi*
Bogotá, 2015
alvarado.lincopi@gmail.com

Con Bolívar por Ayotzinapa

Los tambores de la batucada feminista *La Tremenda Revoltosa* hacían bailar la rabia en La Plaza Bolívar en Bogotá. El fuego tembloroso de las velas nos insistía en la tristeza al esbozar el número 43. Las marchitas hojas fotocopiadas en donde se inscribían las caras y los nombres de los gritados por toda Latinoamérica, revoloteaban por manos y voces de jóvenes colombianos que, aclimatados mas no avasallados por gobiernos de muerte y sangre, insistían con la solidaridad, para que al menos sepan los asesinos que los muertos no están solos, que la memoria de esos rostros dignamente mexicanos no se desvanece ni con la bala, ni con el fuego.

Lxs compxs de México, presentes en la reunión, nos hablaron de los desaparecidos, de la muerte, del narco, de los políticos del PRI, del PAN, del PRD, todos tan asesinos. También nos contaron de la ternura y la rabia de un pueblo, de una dignidad que comenzaba a copar las avenidas y callecitas del monstruo mexicano y, por sobre todo, nos describieron un lugar perdido, con hombres y mujeres olvidados por la desidia de quienes gobiernan desde las capitales. Ellos, los perdidos entre la geografía mesoamericana, tantas veces muertos, tantas veces asesinados, tantas veces desaparecidos, emergían nuevamente copando proclamas, gritos, protestas, dignidades.

Fue un momento palpitante aquella tarde en la ciudad de las eternas nubes, de alguna manera lo que decían los compas mexicanos

nos sacudía, pero no sólo por la miseria centenaria de los de arriba, sino porque Ayotzinapa era también nuestros pueblos perdidos, nuestras patrias olvidadas. Naturalmente, por los dolores de la Colombia herida también se gritó aquella tarde de lucha contra el olvido y el silencio, cómo no pensar en todos los desaparecidos y asesinados en manos del Paramilitarismo y el Narcotráfico, cómo no pensar en El Salado, en Mapiripán, en Segovia, y tantos otros pueblos en la diversa geografía colombiana que debieron, y deben soportar la violencia del capital en todas sus formas. Cómo no pensar en las barriadas de nuestras ciudades que, a fin de cuentas, sufren la misma desidia del poder que sufren esos pueblitos perdidos; lugares en donde la vida humana es un número, un destello que, si así lo decide un milico o un paraco, puede ser apagado sin previo aviso, sin razón alguna; sino me cree, pregúntele a las madres de los jóvenes de Soacha, en la periferia bogotana, asesinados por las Fuerzas Militares por el sólo hecho de ser pobres.

Aquella tarde, lxs compxs colombianxs, en esa plaza que ha sido testigo de tantas luchas, de tantas muertes, gritaron firme por Ayotzinapa y por todos nuestros muertos.

Cantaron:
"Mi voz, la que esta gritando.
Mi sueño, el que sigue entero.
Y sepan que solo muerdo
Si ustedes van aflojando,
Porque el que murió peleando
Vive en cada compañero.
Por nuestros muertos



ni un minuto de silencio
toda una vida de combate.
¿Hasta cuándo? Hasta siempre
¿Hasta dónde? Hasta la victoria
Y si es preciso hasta la MUERTE”.

Una bandera roja flameaba al lado de la estatua de Bolívar. Un chico lanzaba fuego desde su boca. Las velitas ya estaban casi derretidas o apagadas por el viento. Los asistentes nos mirábamos con una extraña y linda complicidad. La actividad ya estaba terminando. Una agua aromática fue la última compañía para capear el frío.

Dos fragmentos entre millones

Cuando, junto a mi compañera, viajábamos de vuelta al sur de Bogotá, y realmente de esto no me acuerdo pero pienso que posiblemente pudo ser así, quizás no en ese momento, pero sí en otro, conversábamos sobre los tantos muertos regados por toda Latinoamérica ¿Cuántos serán? Nos preguntábamos.

José del Pozo, a principios del milenio, dijo que “los muertos por razones políticas superaban el medio millón de personas, la gran mayoría víctimas del Terrorismo de Estado” (2002: 199). Del Pozo, él lo dice, estaba sólo contando los asesinados entre las décadas de 1960 y 1990, entonces realmente la cifra supera con creces aquel número. No contó los asesinados en todas las luchas campesinas y obreras desde fines del siglo XIX, tampoco contó las muertes que ha dejado el narcotráfico y aún no vislumbraba los charcos de sangre que ha dejado la relación entre políticos, narcos y paracos, como en el gobierno de Uribe Vélez en Colombia, por poner un ejemplo.

Tantos muertos, tantos desaparecidos. Inevitablemente se me vienen algunos nombres. *Matías Catrileo* joven mapuche de

23 años, quien en un proceso de recuperación territorial en Vilcún, *Wallmapu* cae muerto de una bala policial en enero del 2008, era el primer gobierno de Bachelet y aún persiste la impunidad. *Julio López*, quien durante la última dictadura Argentina estuvo recluido en un Centro Clandestino de Detención (CCD), aguanto los vejámenes de milicos criollos muy bien entrenados por yanquis en La Escuelas de las Américas antes de ser liberado; y cuando se pensaba que la democracia ya se había afirmado con los gobiernos kirchneristas, Julio declaró contra Miguel Etchecolatz, ex agente policial, torturador y genocida de los años oscuros, testimonio que le valió una segunda desaparición, la primera en democracia, pues desde el 18 de septiembre del 2006 no hay noticias de su paradero. Sólo dos pequeñas historias entre millones.

Pueblitos latinoamericanos perdidos en Latinoamérica

Nunca antes había escuchado hablar de Ayotzinapa. Hay lugares que sólo aparecen mediante la muerte. Los zapatistas entendieron esta triste realidad, aparecieron para el mundo tapándose, borrándose, y sólo así, fueron y son, la muerte de la muerte... “Y miren lo que son las cosas porque, para que nos vieran, nos tapamos el rostro; para que nos nombraran, nos negamos el nombre; apostamos el presente para tener futuro; y para vivir... morimos”, explicó el ex Subcomandante Marcos.

Yo nunca antes escuché nada sobre Ayotzinapa, pero cuando leí sobre los compas desaparecidos, quizás por esa ignorancia que dejan los libros, imaginé la Comala de Juan Rulfo. Un lugar habitado por fantasmas, muchos fantasmas como los asesinados por un Pedro Páramo cualquiera que comparten los andares cotidianos con chicos tan vivos, con jóvenes rebozados de



vida. Juan Preciado, el huérfano-protagonista de la novela de Rulfo, podríamos pensarlo como los normalistas desaparecidos, los vivos dejados de lado, quienes reclaman lo suyo desde un pueblo fantasma, gobernado por sanguinarios caudillos de la muerte. Quizás los chicos normalistas se sintieron interpelados por las palabras de la madre de Preciado, abandonada junto a su hijo por Pedro Páramo, cuando le dice a su retoño: “No vayas a pedirle nada. Exige lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio... El olvido en que nos tuvo, cobráselo caro” (1955: 7). *El olvido en que nos tuvo...* esa frase retumba entre los pueblos huérfanos de la latinoamérica entera.

Y pareciese que de esos pueblitos perdidos Latinoamérica fuese un fértil útero. No sé, pienso en la Villaviciosa de Bolaño, tan bien retratada por ese personaje extrañísimo que pasaba días enteros en un banco de la Alameda en el D.F. El Gusano, según recuerda Arturo Belano,

“Dijo que el pueblo no tenía más de sesenta casas, dos cantinas, una tienda de comestibles. Dijo que las casas eran de adobe y que algunos patios estaban encementados. Dijo que de los patios escapaba un mal olor que a veces resultaba insoportable. Dijo que resultaba insoportable para el alma, incluso para la carencia de alma, incluso para la carencia de sentidos. Dijo que por eso algunos patios estaban encementados. Dijo que el pueblo tenía entre dos mil y tres mil años y que sus naturales trabajaban de asesinos y de vigilantes” (1997: 77).

Villaviciosa, en el universo de Bolaño, compone uno de los lugares por donde atraviesa la violencia más descarnada al norte de México, atrapado por un circuito de la muerte que, como en la novela 2666, no

cesa, es abrumadora e interminable, y todo bajo el sosiego y complicidad de policías y burócratas. Es la banalidad del mal en Nuestra América. Villaviciosa podría ser Comala, Ciudad Juárez o Ayotzinapa, muertes y muertes bajo la impunidad absoluta. Cadáveres que aparecen tirados por el desierto, en fosas comunes, olvidados, encontrados por casualidad o quizás entregados por la naturaleza para el alivio de sus familiares.

Por su parte, desde tierras caribeñas, Gabriel García Márquez, finalizando su *Cien Años de Soledad*, describe el fin de Macondo: “Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugados por la cólera del huracán bíblico” (2007: 495). Macondo, Comala y Villaviciosa tienen en común lo inevitable de su tragedia, rondada por la muerte, fantasmas y huracanes bíblicos. Sus finales recuerdan que a pesar del jolgorio, los heroísmos y la porfía de poblar quebradas rocosas, pampas desérticas, montes lluviosos, selvas húmedas, el acabose siempre es un murmullo siniestro en la orfandad geográfica. Ahora, esa orfandad no se vive sólo por los murallones de la naturaleza, sino sobre todo por la delicada ceguera de un capitalismo que segrega territorios, que impone lugares para el habitat confortable de nuestras burguesías mientras que fractura las dignidades populares mediante espacios de marginalidad y pobreza. Nuestro querido Lemebel, recientemente bailarín eterno, narra el ataque invernal en la periferia urbana santiaguina:

“Cada invierno, son casi los mismos lugares que reciben la agresión violenta del desamparo municipal. Son los mismos canales: la Punta, las Perdices, el Carmen o las Mercedes, que se revientan en cataratas de palos, pizarreños y gangochos que



arrastra la corriente sucia, la corriente turbia que no respeta ni a los cabros chicos, los inocentes niños entumidos que con los mocos del resfrío blanqueando sus ñatas, se amontonan en los albergues temporales que, por lástima y culpa social, les proporciona la municipalidad” (1998: 67).

Hace frío en el campo, hace frío en la ciudad,
¡frío en toda la vida!

*

Que nos sepan perdonar los familiares y compañeros pero las actividades de solidaridad por Ayotzinapa comienzan a disminuir, y no es necesariamente olvido, ellos muy bien lo saben, sino las coyunturas locales que nos apremian. Por ahora, millones de gratitudes para ellos, por la fuerza, por la dignidad, por hacer que en toda Latinoamérica se entonara el nombre de un pueblo desconocido y, con él, nos volcáramos a mirar nuestras geografías ocultas pero fundamentales, aquellos microcosmos que sustentan con la desposesión de sus territorios y la explotación de su mano de obra los andares en los barrios frescos como Lomas de Chapultepec, Lomas Virreyes o Polanco, o de barrios gomelos como Usaquén, Chico o Rosales, o de barrios cuicos como El Golf o La Dehesa.

Estos últimos barrios, nada de huérfanos, nada de perdidos, pueden ser todo, pueden tenerlo todo, pero NO son Ayotzinapa, no

pueden vivir esa solidaridad que recorrió la América morena, travestida y profunda, desde la cual, posicionados, manchados y heridos nos convencemos de que la orfandad de padres protectores se superara con la ternura y solidaridad entre hermanos perdidos... en esa tarea estamos, en la tarea de encontrarnos.

Notas

* Claudio Alvarado Lincopi es Licenciado en Historia con Mención en Estudios Culturales por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Chile). Actualmente estudia la Maestría en Historia y Memoria en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP-Argentina). Miembro del Centro de Estudios e Investigaciones Mapuche - Comunidad de Historia Mapuche (Chile).

Bibliografía

- Bolaño, Roberto (1997). *Llamadas telefónicas*. Barcelona: Anagrama.
- Del Pozo, José (2002). *Historia de América Latina y el Caribe (1825-2001)*. Santiago: LOM.
- García Márquez, Gabriel (2007). *Cien años de soledad*. Santiago: Editorial Debolsillo
- Lemebel, Pedro (1998). *De perlas y cicatrices*. Santiago: LOM.
- Rulfo, Juan (1955). *Pedro Páramo*, México: Fondo de Cultura Económica.



Del 1 al 43... Justicia

José Huerta Coronel*
Ciudad de México, 2015
josehcoronel@gmail.com

Hace poco más de ocho años que México vive sumergido en un estado de violencia. La guerra contra el narcotráfico anunciada por el ex presidente Calderón ha cobrado la vida de miles de personas. Pareciera que, poco a poco, nos hemos acostumbrado –si es que ello es posible– a vivir con la violencia a un lado de nosotros. Hay quienes las viven más de cerca, aquellos que cotidianamente tienen que frenar sus actividades porque hay balaceras en toda la ciudad, espacios donde perder la vida es un miedo latente. Hay quienes somos un poco más afortunados y nos enteramos de este tipo de cosas a través de las noticias y redes sociales, las desapariciones forzadas, los cuerpos encontrados, la censura a periodistas son temas que han dejado de ser ajenos para nosotros.

El 26 de septiembre pasado el país se paralizó, 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa habían desaparecido y las hipótesis sobre su localización no se hicieron esperar. Con el pasar de las horas y los días, el número 43 adquirió el rostro de un pueblo indignado, harto de vivir en la violencia y el miedo, de un México que no podía continuar indiferente ante lo que a otros les sucede de manera cotidiana.

El tema se discutía en charlas de café, en foros académicos y no académicos, en espacios que siempre se habían mantenido al margen se hacían llamados al esclarecimiento de los hechos. Se hacía un llamado a recuperar la paz perdida.

Sin duda, el sector estudiantil era el más afectado, no importaba si asistías a una universidad pública o privada, ante la desaparición de los 43 normalistas regresó en los estudiantes el miedo de ser criminalizado, un escalofrío y hueco en el estómago, un vacío sin justicia. Era momento de solidarizarse y hacer algo y el #YoSoy132 había dejado buenas lecciones años atrás.

Se organizaron protestas simbólicas, clases públicas, brigadas informativas en transporte público y mercados populares. Se imprimieron volantes informativos, se hicieron pancartas y videos para llegar a más personas. En conciertos se contaba del 1 al 43 y se clamaba justicia. Se hacían cadenas humanas con veladoras demandando el regreso de los estudiantes. Lo ocurrido en Iguala cimbró en los corazones de muchos estudiantes, maestros y padres de familia y un inminente despertar estaba cerca. Ya no se trataba más de personas ajenas, eran estudiantes como nuestros hijos, vecinos, primos y hermanos. Estudiantes con sueños y aspiraciones de un México mejor, un país donde no queremos más que ser estudiante sea sinónimo de estar en peligro.

Los días previos a las marchas eran confusos, rumores de posibles represiones hicieron que muchos que en primera instancia querían participar dejaran de lado sus intenciones. En las primeras movilizaciones se realizaron detenciones, mismas que no fueron suficientes para frenar a miles en su camino por clamar justicia.



Las marchas estaban llenas de energía, conforme transcurrían, el miedo desaparecía y se transformaba en miradas cómplices que compartían la indignación. Sonreían por ser testigos del despertar ciudadano, por levantar la voz y decir nuevamente ¡Ya basta!, las calles cobraban vida y tenían voz. Las avenidas de la Ciudad más grande del mundo gritaban justicia. De pronto todos eran los 43 estudiantes. En las escuelas públicas y privadas sentían en mismo dolor y el mismo temor. Se invitaba a la gente a la protesta, en las aulas los profesores reflexionaban con los estudiantes sobre los hechos. En las diferentes instituciones de educación superior se escribían pronunciamientos para pedir justicia y se invitaba a velar por la libertad de protestar.

Las redes sociales nuevamente jugaron un papel crucial en la organización de las protestas, por Facebook y twitter se anunciaban las rutas de los contingentes, las consignas que acompañarían el caminar por más de cuatro horas a las miles de personas que clamaban justicia. Cuando los contingentes arribaban al Zócalo de la Ciudad, el temor se colaba paso a paso estremeciendo las voces y estremecía las voces. Los pasos al caer la noche eran sigilosos, el silencio era más imponente que escuchar gritar a todos al unísono. Las estaciones del metro eran resguardadas por policías, en redes sociales se virilizaban imágenes que sólo confundían, gente corría junto a los contingentes, no se lograba ver nada. Poco a poco se invitaba a no abandonar los contingentes ante el latente riesgo de una detención.

Con el pasar de los días y las marchas, el temor crecía. Periodistas detenidos, todos conocían a alguien que subía fotos a sus redes sociales mostrando las huellas del enfrentamientos con granaderos al ser desalojados, estudiantes agredidos, otros

más detenidos ante la imputación de cargos inverosímiles.

Poco a poco el miedo fue ganando terreno, hizo que muchos estudiantes ya no salieran de sus casas. Las comisiones de seguridad invitaban a través de Facebook y twitter e incluso en las asambleas, a cargar consigo credenciales que los acreditaran como estudiantes. Todos sabían qué hacer en caso de una detención, muchos marchaban con la constitución en mano aun cuando no existiera certeza de que sus derechos fueran a ser respetados. Nadie tenía que caminar solo por las calles, todos tenían que avisar en todo momento su localización. En sus brazos marcaban con plumón permanente color negro los teléfonos de emergencia, los números de sus contactos más cercanos de sus padres y hermanos. En el otro brazo teléfonos de profesores y amigos. Al concluir las marchas, era momento de verificar a través de las redes sociales si todos estaban a salvo, era momento de emprender el regreso a casa teniendo como compañero al miedo pero con la satisfacción de haber hecho algo para que las cosas cambiaran.

Han pasado ya seis meses desde aquel 26 de septiembre que cambió nuevamente al país, seis meses de interrogantes sin respuestas, de que el mundo entero volcó su mirada ante los hechos, seis meses donde se organizaron protestas en las principales ciudades del globo. Seis meses con pocos avances se han presentado respecto al caso de los normalistas de Ayotzinapa, donde se siguen exponiendo sillas vacías con los rostros de los normalistas. Esta lucha continua, y seguirá haciéndolo mientras el miedo no se apodere de todos los que estamos involucrados de una u otra forma. Informando, marchando, manifestando nuestra inconformidad, clamando por justicia. Pues el día que sintamos que el miedo se



apodera de nosotros y nos paraliza, ese día habremos perdido la batalla.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43... JUSTICIA

Notas

* José Huerta Coronel es estudiante avanzado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (México).



Ayotzinapa a seis meses, nos siguen faltando 43, ¿qué hacemos?

Nydia Lourdes Reyes Rodríguez*
Puebla, 2015
marx_ita@hotmail.com

Hace unos días, el domingo... un grupo de profesores universitarios organizaron una clase abierta por Ayotzinapa en el zócalo de la ciudad de Puebla. En aquella actividad, invitaron a la gente que paseaba a conversar con ellos y con dos de los estudiantes de la normal rural "Raúl Isidro Burgos" que estaban ahí para ofrecer una clase abierta de dignidad, valor y resistencia. Dos de los ayotzis (como les dicen los estudiantes de licenciatura) estaban ahí compartiendo la palabra con la gente que quería detener el paso y escucharlos, y es que no todos se detienen a escuchar y eso duele. El grupo de profesores universitarios salió a la calle a hacer lo que pueden hacer, lo que saben hacer: dar clases, ellos mismos lo decían: "queremos alentar la reflexión colectiva y auspiciar conversaciones y debates que ayuden a pensar en un horizonte que vaya más allá de este presente de miedo, represión y muerte". Se autoconvocaron para que colectivamente nos preguntemos: ¿qué hacemos si nos siguen faltando 43?; ¿qué hacemos? Lo mismo me pregunto yo, le pregunto a mis compañeros universitarios, le preguntamos a los ayotzis, nos pregunta la gente en las calles cuando vamos marchando, en la casa a la hora de la comida, o por redes sociales los amigos de otros países.

No dejamos de preguntarnos ¿qué más hacemos? porque parece que no es suficiente lo que hemos hecho hasta ahora, porque no aparecen los muchachos de Ayotzinapa, porque siguen los feminicidios,

porque cada día se encuentran más fosas clandestinas, cuerpos incinerados, desmembrados, porque amenazan y matan reporteros, porque se reprimen las movilizaciones cada vez con más violencia, porque mataron a un profesor en Guerrero por salir a marchar, porque secuestraron y golpearon brutalmente a mis amigos, estudiantes de la universidad de Puebla, que hacían una huelga de hambre demandando educación popular, porque me han intervenido el teléfono y me siguen en las calles.

La primera vez que nos hicimos esa pregunta fue cuando nos enteramos de lo que había sucedido aquel 26 de Septiembre en Iguala, Guerrero, cuando la incertidumbre de no saber qué había pasado con los 43 estudiantes nos colocaba en la cabeza la posibilidad de que cualquiera de nosotros podría haber sido uno de los 43. Pensábamos que el rostro arrancado al normalista Julio Cesar Mondragón era una muestra de la violencia y brutalidad humana y, al mismo tiempo, lo sentíamos como un mensaje para todos los estudiantes que hemos hecho actividades como la que realizaban Julio Cesar y sus compañeros aquel día 26 en Iguala cuando recolectaban fondos para la normal y para poder asistir a la marcha en el DF en conmemoración a los estudiantes asesinados en Tlatelolco el 2 de Octubre de 1968. La imagen de julio Cesar sin rostro nos helaba la piel, esa imagen nos decía que podían quitarte lo que te hace único, que te podían quitar todo hasta la



sonrisa, la mirada, la identidad y que tenían el poder de hacerte nadie. Pensaba que el rostro de Julio César podía ser el de mis estudiantes de la preparatoria abierta donde doy clases, o el de uno de mis amigos que estudian la licenciatura o de alguno de mis compañeros del posgrado, o el mío.

No podíamos imaginar lo que los padres de Julio César y de sus compañeros desaparecidos estaban sintiendo, los veíamos que salían a marchar y pensábamos que eso era lo mínimo que nosotros podíamos hacer, así que salimos. En Puebla, desde hace 20 años que no se veían marchas como las que se han realizado en las jornadas por Ayotzinapa, el contexto de cada Estado de la república mexicana es distinto y en cada uno se realizaron acciones en solidaridad dentro de sus posibilidades y en la medida en que la violencia del narcogobierno lo permitiera.

En Puebla comenzamos por la organización y la unión entre estudiantes de todos los niveles, desde preparatorias hasta doctorados. Se convocó a una primera Asamblea General a la cual asistimos pocos, cabíamos en un salón de clases. Sin embargo, para la segunda Asamblea requerimos de un auditorio y, posteriormente, de espacios al aire libre pues el número de personas incrementaba, al igual que la negativa de las autoridades universitarias por brindarnos los espacios para la deliberación. Poca experiencia había en cuestión de asambleas y costaba trabajo la discusión y el orden. Gracias a la diversidad y pluralidad fuimos aprendiendo y creando en el camino nuestras propias formas de organizar el tiempo y el espacio.

En varias universidades del país se fueron organizando asambleas por facultades y posteriormente generales, así se convocó desde la UNAM a una asamblea

interuniversitaria nacional que buscaba articular y coordinar junto con los normalistas de Ayotzinapa una Coordinadora Nacional Estudiantil que condensara la fuerza estudiantil que se estaba movilizandando en todo el país. El ritmo de cada asamblea era diferente, la UNAM y sus colectivos iban marcando el paso, sin embargo en muchas otras universidades las posibilidades de seguir este ritmo eran limitadas, algunas acciones nacionales se lograron hacer en la mayoría de las universidades del país, como el paro total o parcial de las actividades estudiantiles. Esos paros activos fueron lo único permitido por las autoridades universitarias. En estas jornadas se realizaban actividades culturales, artísticas y también informativas respecto a la situación de la educación popular, la función de las normales rurales y temas que de distintas formas eran abordados por los estudiantes y profesores que se sumaban.

Los llamados a salir a marchar venían de los compañeros de Ayotzinapa y de la asamblea interuniversitaria que se reunía los sábados y a la que asistían representantes de universidades de todo el país. El aprendizaje en colectivo es algo que no se puede cuantificar y que probablemente aún no podemos palpar su impacto en la sociedad. Al menos en Puebla, la mayoría de los estudiantes nunca habían participado en una marcha o en una asamblea, no conocían las consignas, ni las precauciones que se debían tomar. Poco a poco se formaron comisiones y brigadas que salieron fuera del espacio universitario a los mercados, colonias, parques, transportes urbanos y otros espacios para informar e invitar a las jornadas por Ayotzinapa.

Las actividades han sido diversas, desde marchas en silencio, caminatas, actividades culturales, paros laborales, toma de edificios de la administración pública, liberación del



cobro de peaje en las autopistas privatizadas, pintas, tendedores informativos, brigadas, cierre de calles y avenidas, eventos musicales, clases abiertas en plazas públicas o parques, entre muchas otras que seguramente no puedo recordar, o no conozco, pero que estoy segura abonan a la recuperación del control de nuestros espacios comunes y que dan cuenta de una solidaridad y acción colectiva que desde hace tiempo no se veía en México.

En octubre, en una de las jornadas globales por Ayotzinapa fueron a la Universidad de Puebla dos compañeros normalistas, uno de ellos sobreviviente del día 26 de septiembre. Allí él nos contó cuando los balearon los policías, cuando los entregaron al ejército, cuando logró escaparse y correr a ocultarse entre la hierba, cuando volvió a su casa con su familia y nos dijo que a pesar de todo esto él no tenía miedo, tenía rabia y ganas de seguir luchando. Nosotros les preguntamos: ¿qué hacemos?, y ellos dijeron: “organícense y hagan lo que saben y lo que puedan hacer”; para ese momento no sabíamos lo que haríamos ni lo que lograríamos hacer, solo nos acercamos y les dimos un abrazo, uno de ellos lanzó un fuerte grito que venía desde la sierra de Guerrero, desde el campo y desde su dolor: “¡Ayotzi vive!”, gritó con una voz fuerte, firme y llena de orgullo y dignidad.

Hoy, a casi seis meses de los sucesos de Iguala, en México enfrentamos una emergencia nacional, la violencia sistemática desde el narcogobierno ha generado un nuevo dispositivo de violencia política y mediática que desestructura la capacidad social de distinguir y comprender con claridad la situación por la que pasa el país. Así, la criminalización de la protesta social y, específicamente, de los estudiantes y maestros, da cuenta de una campaña mediática que busca justificar los actos represivos del Estado mexicano en contra de

los que ejercemos el derecho a manifestarnos y de los que resisten a la privatización de lo público y el despojo sistemático de lo común. Por medio de las recientes reformas estructurales, en materia de educación, trabajo, impuestos, telecomunicaciones y recientemente energéticos, en esta etapa de profundización del neoliberalismo en México, se busca dar legalidad a un proceso que claramente favorece a unos pocos y que perjudica a la mayoría de los mexicanos.

Hoy, a casi seis meses de lo ocurrido a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, nos seguimos preguntando ¿qué hacemos? y pienso que es bueno no dejar de hacerse la pregunta, ahora en colectivo y con objetivos más amplios, ¿qué hacemos para defender el agua, para defender nuestro petróleo, para defender nuestro derecho a expresarnos, para defender nuestros recursos naturales, para defender nuestra cultura, para recuperar nuestra universidad pública, para recuperar nuestra voz? Creo que, a diferencia de octubre, haremos lo que ya aprendimos y lo que podemos hacer como colectivo que aún está construyéndose. Sabemos que tenemos que articularnos con más organizaciones y movimientos sociales de nuestro estado, de otros estados de México, de otros países de América Latina, de otros continentes, porque hemos sentido su solidaridad. Sentimos que desde muchas partes del mundo abrazan a Ayotzinapa en su grito de orgullo y dignidad, porque compartimos luchas y compartimos indignación y porque cada vez tejemos más sentidos y objetivos comunes, porque es una lucha por la vida y esa nunca ha de parar.

Notas

* Nydia Reyes es estudiante del Doctorado en Economía Política del Desarrollo. Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.



Ayotzinapa somos tod@s

Melina Jean Jean*
La Plata, 2015
melinajeanjuan@gmail.com

El día 26 de septiembre del 2014 durante la noche, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos del pueblo de Ayotzinapa viajaron a la ciudad de Iguala. Según el testimonio de los sobrevivientes, habían ido a esta localidad a realizar una colecta para financiar sus estudios y un transporte en pos de viajar al Distrito Federal y asistir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1968 (Matanza de Tlatelolco). La policía, a mano armada, atacó a los estudiantes dejando un saldo de 6 muertos, 5 heridos de gravedad y 43 desaparecidos. Según la versión del alcalde José Luis Abarca, los normalistas pretendían sabotear la fiesta de celebración que él mismo había organizado para su esposa, María de los Ángeles Pineda, por los logros obtenidos durante su gestión, y por este motivo habría dado la orden de reprimir. Por su parte, el gobierno mexicano aseguró que los 43 estudiantes tuvieron un enfrentamiento con la policía municipal, que los detuvo y entregó al cártel del narcotráfico Guerreros Unidos. Acorde a esta versión, los sicarios del cártel, al pensar que pertenecían a Los Rojos, su grupo rival, asesinaron y quemaron a los estudiantes en un basurero cercano a la localidad de Cocula, y luego arrojaron sus restos a un río. Los familiares de los desaparecidos, intelectuales, organizaciones de derechos humanos y miles de mexicanos rechazaron decididamente esta versión del gobierno.

En este contexto, sucedió algo particular a escala mundial. La solidaridad, la protesta y el reclamo por los 43 estudiantes, tomaron

forma a través de múltiples y diversas acciones e intervenciones artísticas en espacios públicos que se visibilizaron fundamentalmente por medio de fotografías en las redes sociales. Los denominadores comunes de la “Acción Global por Ayotzinapa” fueron la afirmación “Ayotzinapa somos tod@s” y el reclamo “Con vida se los llevaron, con vida los queremos”. Ante estos acontecimientos, algunos estudiantes de la Maestría en Historia y Memoria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, nos sentimos muy movilizados, no sólo por la gravedad del hecho en sí sino también por un sentimiento que surge de compartir una identidad común, la de ser estudiantes. De esta forma, decidimos pronunciarnos el día 24 de octubre del 2014 a través de un comunicado que difundimos vía Internet. Allí fundamentalmente externamos nuestro firme rechazo al accionar criminal de las fuerzas policíacas municipales y estatales de Guerrero contra los estudiantes normalistas, exigimos justicia y nos solidarizamos con los compañeros/as y familiares de las víctimas en sus demandas, así como con todo el pueblo mexicano *“convencidos como estamos, que esta es una afrenta contra todo el pueblo de ese país y de toda Nuestramérica. Un golpe contra uno es un golpe contra todos los que se organizan para luchar por un presente y futuro mejor”*.

Los días pasaban y la falta de difusión en los grandes medios y ciertas tergiversaciones, plantearon la necesidad de continuar con acciones de visibilización y reclamo internacional. La “Acción Global por



Ayotzinapa” siguió tomando fuerza, volumen y quisimos ir por más. El día 14 de noviembre decidimos realizar una intervención fotográfica en las inmediaciones de nuestra querida facultad en la ciudad de Ensenada. Lanzamos la convocatoria abierta a participar, para poner el cuerpo y dar forma a lo que fue un emotivo reclamo de verdad y justicia. Estudiantes, directivos, docentes y no docentes portaron individualmente la imagen impresa del rostro de cada uno de los 43 estudiantes normalistas. Borrarnos simbólicamente nuestras identidades para decir “todos somos los estudiantes de Ayotzinapa”, ocupamos su lugar y los hicimos presentes. Así mismo, con la ayuda de las agrupaciones estudiantiles de la facultad AULE, LUPAS, UTOPIA (nos dieron papel, pinceles y témperas) diagramamos, dibujamos y pintamos una pancarta (que en México llaman manta) que decía: “24.500 + 43 Con vida los llevaron, con vida los queremos!”. Quisimos sumar al reclamo de los 43, la triste cifra, seguramente no exacta, de todos los desaparecidos en México de los últimos años. Con todo, posamos para las fotografías que fueron tomadas en el patio central, en especial junto a la placa que recuerda a estudiantes, docentes, no docentes y graduados detenidos – desaparecidos de nuestra facultad por el accionar del estado terrorista durante la última dictadura cívico militar. Esto nos permitió trazar un puente entre el pasado de nuestro país y la práctica de la desaparición forzada de personas, con el presente mexicano. En ese patio también se encuentra el mural por los 8 años de la desaparición de Jorge Julio López que pintaron los estudiantes de la facultad, otra imagen que nos remite a la desaparición y al reclamo por memoria, verdad y justicia. Al finalizar esta acción, ese mismo día, prometimos más.

No conformes con lo realizado hasta el momento, pues el contexto lo seguía

ameritando, decidimos doblar la apuesta y organizar una jornada de acción de día completo. Esta vez, la producción fue organizada en conjunto por estudiantes y directivos de la Maestría en Historia y Memoria, integrantes del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano de la UNLP y artistas, docentes y estudiantes de la Facultad de Bellas Artes. En esta ocasión quisimos apostar fuertemente a dar visibilidad a la situación mexicana, es así que decidimos realizarla en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata. Sabíamos lo que esta plaza significa. Conocemos la historia y la importancia simbólica de la apropiación de este espacio público en el marco de luchas y reclamos por violaciones a los derechos humanos. Además, dado nuestro principal objetivo, se trataba de un punto estratégico para que el alcance y la convocatoria de la Jornada se extendiera y multiplicara por fuera de nuestros espacios universitarios, hacia la comunidad. La cita fue el día miércoles 17 de diciembre y la denominamos “Jornada por Ayotzinapa, México: SOMOS ESTUDIANTES, SOMOS AYOTZINAPA”.

El arte fue el medio de enunciación privilegiado y se manifestó a través de diversas técnicas. Por un lado, la artista Florencia Basso diseñó una imagen donde en la base podía leerse la frase “Ayotzinapa somos todos”, por encima varios brazos y manos se superponían y entrelazaban reforzando el mensaje textual. Manos abiertas y cerradas, puños en alto, en lucha, exigiendo verdad y justicia pero también solidaridad. Esta fue la imagen de la serigrafía que junto con la artista Leticia Barbeito (con quien conforman el colectivo de arte Puchero) prepararon para imprimir y multiplicar, como lo habíamos anticipado en la convocatoria, en remeras y papel durante toda la jornada. La imagen se replicó en distintos colores y soportes, la gente efectivamente asistió con su remera e incluso,



algunos se animaron a hacer ellos mismos las impresiones guiados por las artistas. Por otro lado, realizamos *stencils* con la especial colaboración de Paula Román y las artistas Clarisa López, Sol Preciado y Romina Rastelli en la producción de las plantillas. Llevamos hojas blancas, témperas de colores y rodillos. Colocamos todos los elementos en una mesa e invitamos a todos los concurrentes a realizar allí los *stencils* para luego repartirlos a los ocasionales transeúntes. Al final de la jornada unos chicos nos pidieron algunas de esas plantillas para intervenir las calles.

Otra significativa puesta en escena fue la realizada por Aminta, artista mexicana estudiante de la Facultad de Bellas Artes, quien a través de una convocatoria pública recepcionó imágenes (dibujos, collages, diseños digitales, entre otros) en alusión a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Las mismas fueron impresas, colocadas en soportes de cartulina y colgadas alrededor del espacio donde funcionó la jornada. En estos momentos, Aminta y otros artistas colegas se encuentran finalizando un audiovisual que registra las actividades de la jornada. Otra acción importante, que sabemos tuvo su difusión en medios digitales mexicanos, fue la participación del colectivo SADO. Organizada por Marina Félix y Aurelia Osorio, la intervención consistió en realizar fotografías de la palabra “Ayotzinapa” y el número “43” formados en el suelo de la plaza con la puesta de cuerpo completo de los participantes de la jornada. De esta forma, los cuerpos humanos se transformaron en palabra y número, en un reclamo fuerte, contundente y sobre todo muy emotivo. Además, se repitió la puesta fotográfica de portar los rostros de cada uno de los estudiantes normalistas, esta vez en el centro de la plaza, por delante del monumento a San Martín y detrás de los pañuelos blancos

de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo pintados en el suelo. Una puesta en escena decididamente muy significativa y movilizadora. Por otra parte, durante la jornada también repartimos copias impresas del comunicado que lanzamos el 24 de octubre, como parte de nuestro objetivo de visibilizar y comunicar lo acontecido en México. Hubo momentos de charlas y debates con personas que se acercaban a preguntarnos qué hacíamos y por qué. Fue una jornada intensa que se extendió durante toda la tarde, donde también el sol y el calor nos obligaron a replegarnos a un costado de la plaza bajo los árboles. Ese fue el espacio público que construimos entre todos los que organizamos y participamos de esta acción comunicativa, de reclamo e información. Por último, las fotografías que registraron esta jornada, tomadas por Andrea Raina, en conjunto con las del 15 de noviembre y el comunicado, fueron enviadas y difundidas a través de medios digitales mexicanos en las redes sociales.

Tal vez la proximidad del caso no permita aún medir los alcances y la potencia expresiva de estas acciones colectivas. Pero sin dudas no podemos menospreciar la importancia del acto solidario y el compromiso que asumimos como estudiantes de impulsar la visibilidad de estos hechos que, como dice una de las intervenciones artísticas por la desaparición de Jorge Julio López en la ciudad de La Plata “¿A qué te podés acostumbrar?”. La lucha debe seguir en pie. Continuaremos apoyando a nuestros hermanos mexicanos desde nuestros espacios, y con fuerza alzaremos nuestras voces junto a la de ellos, exigiendo verdad y justicia. No a la impunidad, no al olvido, porque México nos duele, porque Ayotzinapa somos tod@s.



Notas

* Melina Jean Jean es Licenciada y Profesora en Historia de las Artes orientación Artes Visuales. Maestranda en Historia y Memoria (FAHCE-UNLP). Becaria investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. Miembro del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano de la UNLP.





Fotografía: Colectivo SADO